

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

38ª REUNIÓN — 19ª SESIÓN ORDINARIA — 6 DE NOVIEMBRE DE 1991

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor **EDUARDO MENEM**,

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,  
doctor **LUIS A. J. BRASESCO**

Secretario señor **HUGO RAÚL FLOMBAUM**

Prosecretarios: señores **MARIO DÉLFOR FASSI** y **DONALDO ANTONIO DIB**

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan Ramón  
BENÍTEZ, Alfredo L.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRASESCO, Luis A. J.  
BRAVO, Leopoldo  
BRAVO HERRERA, Horacio F.  
BRITOS, Oraldo N.  
CONCHEZ, Pedro A.  
COSTANZO, Remo José  
FIGUEROA, José Oscar  
GASS, Adolfo  
GROSSO, Edgardo Roger M.  
GURDULICH de CORREA, Liliana  
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.  
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.  
LEÓN, Luis Agustín  
LOSADA, Mario Aníbal  
LUDUEÑA, Felipe  
MAC KARTHY, César  
MALHARRO de TORRES, Margarita  
MARÍN, Rubén Hugo  
MAZZUCCO, Faustino M.  
MENEM, Eduardo  
MOLINA, Pedro E.

NIEVES, Rogelio J.  
OTERO, Edison  
POSLEMAN, Eduardo A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.  
ROMERO, Juan Carlos  
ROMERO FERIS, José A.  
RUBEO, Luis A.  
SAADI de DENTONE, Alicia  
SAMUDIO GODOY, Wilfrido  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SAPAG, Elías  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado  
TRILLA, Juan  
VACA, Eduardo P.  
VELÁZQUEZ, Héctor

### AUSENTES, CON AVISO:

AMOEDO, Julio A.  
GENOUD, José  
JUAREZ, Carlos A.

### EN COMISIÓN:

SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

## SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por La Rioja don Libardo E. Sánchez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Página 3589.)

2. Sesión secreta. (Pág. 3589.)

3. Asuntos entrados.

I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 3590.)

II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo. (P.E.-333/91.) (Página 3590.)

III. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se veta el proyecto de ley 24.006 (restablecimiento de la aduana de 3ª categoría de Alvear, Corrientes). (P.E.-331/91.) (Pág. 3590.)

IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el procedimiento de arbitraje para resolver conflictos de intereses civiles y comerciales. (P.E.-332/91.) (Pág. 3591.)

V. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se dispone el cese de la intervención federal a Tucumán. (P.E.-355/91.) (Pág. 3598.)

VI. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 3598.)

VII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 3599.)

VIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 3599.)

IX. Dictámenes de comisiones. (Pág. 3599.)

X. Peticiones particulares. (Pág. 3601.)

XI. Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes con relación al reglamento interno del Instituto Nacional de Educación Física "Dr. E. Romero Brest". (S.-933/91.) (Página 3602.)

XII. Proyecto de ley del señor senador Costanzo por el que se transfiere un inmueble a la Asociación Civil Club Teléfonos Buenos Aires, en Vicente López. (S.-934/91.) (Pág. 3603.)

XIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Malharro de Torres y Solana por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento de la actriz Luisa Vehil. (S.-935/91.) (Pág. 3603.)

XIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan re-

bajas en las tarifas de electricidad y de gas para la industria nacional. (S.-936/91.) (Pág. 3604.)

XV. Proyecto de comunicación del señor senador Vaca por el que se solicitan informes con relación a noticias sobre importación de desechos tóxicos. (S.-937/91.) (Página 3605.)

XVI. Proyecto de ley del señor senador León por el que se declara área franca aduanera, comercial e industrial la zona Barranqueras-Puerto Vilelas, Chaco. (S.-938/91.) (Pág. 3605.)

XVII. Proyecto de ley del señor senador Genoud por el que se modifica el decreto ley 22.415 en lo referente a la información sobre mercadería importada. (S.-939/91.) (Pág. 3606.)

XVIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se aprueban los acuerdos relativos a la aplicación del artículo VI y a la interpretación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio. (S.-941/91.) (Pág. 3607.)

XIX. Proyecto de comunicación del señor senador Grosso por el que se solicitan informes con relación a la adjudicación de la empresa Forja Argentina a Forcor S. A. (S.-942/91.) (Pág. 3632.)

XX. Proyecto de comunicación del señor senador Brasesco por el que se solicitan informes con relación a denuncias de irregularidades en la industria del calzado efectuadas por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina. (S.-944/91.) (Pág. 3633.)

XXI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita la exclusión de los docentes de la enseñanza artística de los alcances del decreto 453/90 (Jubilación de oficio). (S.-945/91.) (Página 3634.)

XXII. Proyecto de declaración del señor senador Lafferrère por el que se expresa disconformidad con el aumento de las tarifas de teléfonos. (S.-946/91.) (Pág. 3634.)

XXIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Malharro de Torres y otros señores senadores por el que se solicita se declare de interés nacional la "Semana de Conmemoración a los Derechos Humanos", a realizarse en San Luis. (S.-947/91.) (Pág. 3635.)

XXIV. Proyecto de ley de los señores senador Malharro de Torres y Cass por el que se dispone la titularización de docentes de establecimientos dependientes del Minis-

proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre **reconversión de la industria eléctrica**. (P.E.-64/91.) (Página 3705.)

29. **Moción de preferencia** formulada por el señor senador **Mac Karthy** para considerar en la **primera sesión de la semana próxima los proyectos de ley sobre transformación de YPF y sobre el marco regulatorio del gas**. (P.E.-370/90 y 63/91.) Se aprueba. (Pág. 3706.)
30. A **moción** del señor senador **Vaca** se considera sobre tablas y se aprueba el **proyecto de ley en revisión por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 41 de la ley 23.990, sobre pensiones gratias**. (C.D.-75/91.) (Pág. 3706.)
31. **Moción** del señor senador **Rodríguez Saá** para pasar a **cuarto intermedio** hasta mañana a las 16 una vez que concluya el tratamiento de los temas previstos para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 3707.)
32. A **moción** del señor senador **Vaca** se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el **proyecto de ley del señor senador Romero sobre ley orgánica del Banco Central de la República Argentina**. (S.-719/91.) (Pág. 3708.)
33. **Moción** del señor senador **Rodríguez Saá** para fijar el **plan de labor** para lo que resta de la sesión de la fecha, y de pasar a **cuarto intermedio** en la reunión de mañana hasta el viernes a las 11. Se aprueba. (Pág. 3755.)
34. **Inserción** solicitada por el señor senador **Solari Yrigoyen** respecto del **informe sobre la LXXXVI Conferencia Interparlamentaria Mundial**. Se aprueba. (Pág. 3755.)
35. **Licencia** solicitada por el señor senador **Figueroa** para ausentarse del país. Se aprueba. (Pág. 3756.)
36. A **pedido** del señor senador **Posleman** se resuelve recomendar **pronto despacho** a la **Comisión de Presupuesto y Hacienda** para el **mensaje y decreto del Poder Ejecutivo** por el que se vota el **proyecto de ley 24.006**, por el que se restablece la **Aduana de Tercera Categoría en Alvear, Corrientes**. (P.E.-331/91.) (Pág. 3756.)
37. A **pedido** del señor senador **Lafferrère** se resuelve recomendar **pronto despacho** a las comisiones de **Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Trabajo y Previsión Social** para el **proyecto de comunicación** del señor senador **Brasero** por el que se solicitan **informes sobre las reiteradas denuncias** efectuadas por la **Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina**, acerca de **irregularidades en la facturación** realizada por **empresas del sector**. (S.-944/91.) (Pág. 3756.)
38. A **moción** del señor senador **Vaca** se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el **proyecto de ley** del que es autor junto con el señor senador

**Rodríguez Saá sobre desregulación de frecuencias de radiodifusión y televisión**. (S.-961/91.) (Pág. 3757.)

39. **Moción de preferencia** formulada por los señores senadores **Storani y Rodríguez Saá** para considerar en la sesión del **próximo miércoles**, con dictamen de comisión o sin él, el **proyecto de resolución** vinculado con la realización de **trabajos en el Congreso de la Nación** por parte de la **empresa Alfredo Palacios Sociedad Anónima** (S.-929/91). Se aprueba. A **pedido** del señor senador **Benítez** se resuelve girarlo también a la **Comisión de Cultura**. (Pág. 3764.)

#### 40. Apéndice:

- I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 3766.)
- II. Inserción. (Pág. 3776.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 35 del miércoles 6 de noviembre de 1991:

**Sr. Presidente (Menem).** — La sesión está abierta.

### 1

#### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia invita al señor senador por La Rioja don **Libardo E. Sánchez** a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador don **Libardo E. Sánchez** procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

### 2

#### SESION SECRETA

**Sr. Presidente (Menem).** — La Cámara pasa a sesión secreta.

—Son las 17 y 37.

—A las 17 y 46:

**Sr. Presidente (Menem).** — Continúa la sesión.

### 3

#### ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde dar cuenta de los asuntos entrados. Los señores senadores han recibido la lista y éste es el momento en el cual pueden formular peticiones respecto de cada uno de los temas que figuran en ella.

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

con la interpelación al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobada. Se procederá en consecuencia.

32

## CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL

**Sr. Vaca.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Vaca.** — Entiendo que ahora debe ponerse en consideración la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto relacionado con la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, iniciativa que cuenta con preferencia para hoy.

**Sr. Rodríguez Saá.** — No hay inconveniente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Prosecretario (Fassi).** — *(Lee)*

### Dictamen de comisiones

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto de ley que presentara el senador Juan Carlos Romero bajo número S-719/91, sobre ley orgánica del Banco Central de la República Argentina, y derogando la ley 20.539 y sus modificatorias; y, por las razones que os dará vuestro miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

##### Régimen general

#### Capítulo I

##### *Naturaleza y objeto*

**Artículo 1º** — El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Federal, regida por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales concordantes.

**Art. 2º** — El Banco Central de la República Argentina tendrá su domicilio en la Capital de la República. Podrá establecer agencias y nombrar corresponsales en el país y en el exterior.

**Art. 3º** — Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda.

El Banco deberá desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor e instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias, en un todo de acuerdo con la legislación que dicte el Honorable Congreso de la Nación.

En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del Estado Federal.

El Banco Central no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.

El Estado Federal garantiza las obligaciones asumidas por el Banco.

**Art. 4º** — Son, además, otras funciones del Banco Central de la República Argentina:

a) Regular la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la economía;

b) Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la ley de entidades financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten;

c) Actuar como agente financiero del Estado Federal, asesor económico, financiero, monetario y cambiario del Poder Ejecutivo nacional, y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido;

d) Concentrar y administrar, en su carácter de agente financiero del Estado Federal, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; y,

e) Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales.

#### Capítulo II

##### *Capital*

**Art. 5º** — El capital del Banco quedará establecido en el balance inicial que se presentará al momento de promulgarse la presente ley. Al final de cada ejercicio anual el Directorio procederá a su ajuste, capitalizando las ganancias líquidas y realizadas, si las hubiere.

#### Capítulo III

##### *Directorio*

**Art. 6º** — El Banco estará gobernado por un Directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y ocho directores. Todos ellos deberán ser argentinos natos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria, o legal vinculada al área financiera y gozar de reconocida solvencia moral.

Art. 7º — El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación; durarán seis (6) años en sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente. Dicho período será contado a partir de la sanción de la presente ley.

Las retribuciones del presidente, el vicepresidente y los directores serán las que fije el presupuesto del banco.

Art. 8º — No podrán desempeñarse como miembros del directorio:

- a) Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno nacional y los que tuvieren otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos nacional, provinciales o municipales, incluidos su poderes legislativos y judiciales. No se encuentran comprendidos en las disposiciones de este inciso quienes ejercen la docencia;
- b) Los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación;
- c) Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas en la Ley de Entidades Financieras.

Art. 9º — Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Carta Orgánica o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo anterior.

La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación. La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.

#### *Atribuciones del presidente*

Art. 10. — El presidente es la primera autoridad ejecutiva del banco y, en tal carácter:

- a) Ejerce la administración del banco;
- b) Actúa en representación del directorio y convoca y preside sus reuniones;
- c) Vela por el fiel cumplimiento de esta carta orgánica y demás leyes nacionales y de las resoluciones del directorio;
- d) Ejerce la representación legal del banco en sus relaciones con terceros;
- e) Propone al Poder Ejecutivo nacional la designación del superintendente de entidades financieras y cambiarias;
- f) Participa con carácter consultivo en las reuniones convocadas por el Poder Ejecutivo nacional

para discutir temas vinculados a asuntos de importancia para la política monetaria, cambiaria y financiera;

- g) Nombra, promueve y separa al personal del banco de acuerdo con las normas que dicte el directorio, dándole posterior cuenta de las resoluciones adoptadas;
- b) Dispone la sustanciación de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, por intermedio de la dependencia competente;
- i) Deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de las Cámaras, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y financiera en ejecución.

Art. 11. — Cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan, el presidente podrá, asimismo, resolver asuntos reservados al directorio, en consulta con el vicepresidente o quien haga sus veces y por lo menos un director, debiendo dar cuenta a ese cuerpo, en la primera oportunidad que el mismo se reúna, de las resoluciones adoptadas en esta forma. De la misma facultad gozará quien lo reemplace.

Art. 12. — El presidente convocará a las reuniones del directorio por lo menos una vez cada quince (15) días. Cinco (5) miembros formarán quórum y, salvo disposición en contrario, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. Por vía de reglamentación podrá el directorio establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importancia.

El ministro de Economía del Poder Ejecutivo nacional, o su representante, puede participar con voz, pero sin voto, en las sesiones del directorio.

Art. 13. — El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en el caso de ausencia o impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las que el presidente —de entre las propias— le asigne o delegue.

El directorio nombrará un vicepresidente 2º entre sus miembros, quien sustituirá al vicepresidente en caso de ausencia temporaria o cuando ejerza la presidencia.

Si el presidente, el vicepresidente o alguno de los directores falleciere, renunciare o de alguna otra forma dejare vacante su cargo antes de terminar el período para el cual fue designado, se procederá a nombrar a su reemplazante, para completar el período, en la forma establecida en el artículo 7º.

#### *Atribuciones del directorio*

Art. 14. — El directorio determina la política monetaria y financiera del banco, atendiendo a lo esta-

blecido en el artículo 39. Corresponde asimismo al directorio:

- a) Intervenir en las decisiones que afecten al mercado monetario y cambiario, estando facultado para operar en ambos mercados;
- b) Prescribir requisitos de encaje, sujeto a las condiciones establecidas en el artículo 28;
- c) Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del Banco;
- d) Establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras;
- e) Efectuar el ajuste del capital del banco, de acuerdo a lo establecido por el artículo 59;
- f) Determinar las sumas que corresponde destinar a reservas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38;
- g) Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero, las que deberán ser observadas por el Instituto de Garantía de Depósitos y por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias;
- h) Revocar la autorización para operar de las entidades financieras y cambiarias y/o disponer su liquidación, por sí, o a pedido del superintendente;
- i) Ejercer las facultades y poderes que asignan al banco esta ley y sus normas concordantes;
- j) Reglamentar la creación y funcionamiento de cámaras compensadoras de cheques y de otros valores que organicen las entidades financieras;
- k) Establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas;
- l) Disponer la desmonetización de los billetes y monedas en circulación y fijar los plazos en que se producirá su canje;
- m) Establecer las normas para la organización y gestión del banco, tomar conocimiento de las operaciones decididas con arreglo a dichas normas e intervenir, según la reglamentación que dicte, en la resolución de los casos no previstos;
- n) Resolver sobre todos los asuntos que, no estando explícitamente reservados a otros órganos, el presidente del banco someta a su consideración.

Art. 15. — Como órgano de gobierno del banco, le corresponden al directorio:

- a) Dictar el estatuto del personal del banco, fijando las condiciones de su ingreso, perfeccionamiento técnico y separación;
- b) Designar a los subgerentes generales a propuesta del presidente del banco;
- c) Crear y suprimir agencias;
- d) Nombrar corresponsales;
- e) Elaborar y aprobar el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y los sueldos del

personal, tanto para el banco como para la superintendencia de entidades financieras y cambiarias;

- f) Aprobar el balance general, la cuenta de resultados y la memoria.

#### Capítulo IV

##### *Administración general del banco*

Art. 16. — La administración del banco será ejercida por intermedio de los subgerentes generales, los cuales deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán reunir los mismos requisitos de idoneidad que los directores.

Los subgerentes generales son los asesores del presidente y del directorio. En ese carácter asistirán a sus reuniones, a pedido del presidente o del directorio. Dependen funcionalmente del presidente o del funcionario que éste designe, que actuará en esta función con el nombre de gerente general.

Son responsables del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación, previa aprobación por el mismo, podrán dictar las reglamentaciones internas que fueren necesarias. Asimismo, deberán mantener informado al presidente sobre la marcha del banco.

#### Capítulo V

##### *Operaciones del banco*

Art. 17. — El banco está facultado para realizar las siguientes operaciones:

- a) Emitir billetes y monedas;
- b) Otorgar redescuentos a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria, que no excedan los quince (15) días corridos, hasta un máximo por entidades equivalente al patrimonio de ésta;
- c) Otorgar adelantos en cuenta a las entidades financieras por iliquidez transitoria, que no excedan los quince (15) días corridos, con caución de títulos públicos u otros valores o con garantía o afectación especial o general sobre activos determinados, siempre y cuando la suma de los redescuentos y adelantos concedidos a una misma entidad, no supere en ninguna circunstancia, el límite fijado en el inciso anterior;
- d) Las derivadas de convenios internacionales en materia de pagos.

Los recursos que se porporcionen a las entidades financieras a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, bajo ninguna circunstancia podrán carecer de garantías o ser otorgados en forma de descubiertos en cuenta corriente.

Los valores que en primer lugar se deberán afectar como garantía de estas operaciones, serán aquellos que

tengan oferta pública y serán valorados según su cotización de mercado.

Los recursos que se proporcionen a las entidades financieras a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, podrán ser renovados luego de transcurrido un período de treinta (30) días desde su cancelación. Estos redescuentos y adelantos le serán reintegrados al banco con preferencia a cualquier acreedor.

Art. 18. — El banco podrá:

- a) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria y cambiaria;
- b) Obtener créditos desde el exterior;
- c) Comprar y vender oro y divisas. En caso que lo haga por cuenta y orden del Ministerio de Economía, en su carácter de agente financiero del Estado federal, las pérdidas o utilidades que se generen, deberán ser acreditadas o debitadas al gobierno nacional;
- d) Recibir oro en custodia;
- e) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales, o representar o formar parte de cualquier entidad de carácter internacional existente o que se cree con el propósito de cooperación bancaria, monetaria o financiera;
- f) Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera.

Art. 19. — Queda prohibido al banco:

- a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos oficiales, provincias y municipalidades, excepto lo prescrito en el artículo 20;
- b) Garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas;
- c) Conceder préstamos a personas físicas o jurídicas no autorizadas para operar como entidades financieras;
- d) Efectuar redescuentos, adelantos u otras operaciones de crédito excepto en los casos previstos por el artículo 17, incisos b) y c) o los que eventualmente pudieran técnica y transitoriamente originarse en las operaciones de mercado previstas por el artículo 18, inciso a);
- e) Comprar y vender inmuebles, con la excepción de aquellas operaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento del banco;
- f) Comprar acciones, salvo las emitidas por organismos financieros internacionales;
- g) Participar directa o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;
- h) Colocar sus disponibilidades en moneda nacional o extranjera en instrumentos que no gocen sustancialmente de inmediata liquidez;
- i) Emitir títulos, bonos o certificados de participación, de colocación o de cumplimiento obligatorio para las entidades financieras;
- j) Pagar intereses en cuentas de depósitos;

k) Otorgar garantías especiales que directa o indirectamente, implícita o explícitamente, cubran obligaciones de las entidades financieras, incluso las originadas en la captación de depósitos.

Art. 20. — El banco sólo podrá financiar al gobierno nacional a través de la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación.

El crecimiento de las tenencias de títulos públicos del banco, a valor nominal, no podrá ser superior al diez por ciento (10 %) por año calendario.

Art. 21. — El banco, directamente o por medio de las entidades financieras, se encargará de realizar las remesas y transacciones bancarias del gobierno nacional, tanto en el interior del país como en el extranjero, recibirá en depósito los fondos del gobierno nacional y de todas las reparticiones autárquicas y efectuará pagos por cuenta de los mismos, sujeto a lo establecido en el artículo anterior.

El banco no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en la cuenta del gobierno nacional ni percibirá remuneración por los pagos que efectúe por su cuenta, pero podrá cargarle los gastos que a su vez haya pagado a las entidades financieras.

El banco podrá disponer el traspaso de los depósitos del gobierno nacional y los de entidades autárquicas a las entidades financieras. Podrá, asimismo, encargar a los bancos la realización de las operaciones bancarias de cualquier índole del gobierno nacional y de las reparticiones o empresas del Estado federal.

Art. 22. — El banco actuará por cuenta del gobierno nacional en la colocación de empréstitos públicos de cualquier clase y plazo y en la atención de los servicios de la deuda pública interna y externa.

En su carácter de agente financiero del Estado federal, el banco podrá reemplazar por valores escriturales, los títulos cuya emisión le fuera encomendada, expidiendo certificados globales. En tal caso los valores deberán registrarse en los respectivos entes autorizados por la Comisión Nacional de Valores de conformidad con las disposiciones de la ley 20.643 y sus modificatorias. Cuando las circunstancias lo justifiquen el banco podrá extender certificados provisorios.

El banco podrá colocar los valores en venta directa en el mercado o mediante consorcios financieros. Podrá promover y fiscalizar el funcionamiento de éstos. No podrá tomar suscripciones por cuenta propia. Cobrará comisión por los servicios mencionados, cargando su importe a la cuenta del gobierno nacional.

Art. 23. — El banco queda facultado para convenir con los agentes fiscales o pagadores, ad referendum del Ministerio de Economía, las medidas que juzgue más convenientes para la debida atención, por cuenta del gobierno nacional, de los servicios de la deuda pública externa.

Art. 24. — El banco cargará a la cuenta del gobierno nacional el importe de los servicios de la deuda pública interna y externa atendida por su cuenta y orden, así como los gastos que dichos servicios irroguen. El gobierno nacional pondrá a disposición del banco los fondos necesarios para la atención de dichos gastos, pudiendo

do el banco adelantarlos dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 20.

Art. 25. — El banco facilitará al Ministerio de Economía el control de todos los actos relativos a la colocación de empréstitos públicos y a la atención de los servicios de la deuda pública, incluso la inutilización y destrucción de valores y la inspección de los libros, registros y demás documentos relativos a tales operaciones, debiendo suministrarle, además, una información especial y detallada concerniente a su desempeño como agente financiero del Estado.

Art. 26. — El banco deberá informar al Ministerio de Economía sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria, flujo de fondos, balance de pagos y del producto e ingresos nacionales, formulando en cada caso las consideraciones que estime conveniente.

Art. 27. — El Ministerio de Economía suministrará al banco las siguientes informaciones correspondientes a cada trimestre:

- a) Movimiento de entradas y salidas de la Tesorería General de la Nación por sus distintos conceptos;
- b) Detalle de la recaudación de los recursos en efectivo y del producto de los del crédito;
- c) Gastos comprometidos, conforme lo permita la implantación de la respectiva contabilidad;
- d) Estado de la deuda consolidada y flotante, tanto interna como externa.

Aparte de dichas informaciones, el banco deberá requerir al Ministerio de Economía, como a los demás ministerios, y reparticiones públicas aquellas otras que le fuesen necesarias o útiles a los fines del mejor cumplimiento de sus funciones.

## Capítulo VI

### *Efectivos mínimos*

Art. 28. — Con el objeto de influir en la cantidad de dinero, el Banco Central de la República Argentina puede exigir que las instituciones financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos y otros pasivos. Estos requisitos de reserva no podrán ser remunerados.

No podrá exigirse la constitución de otro tipo de depósitos indisponibles o inmovilizaciones a las instituciones financieras.

La integración de los requisitos de reserva no podrá constituirse sino en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el banco.

## Capítulo VII

### *Régimen de cambios*

Art. 29. — El banco deberá:

- a) Asesorar al Ministerio de Economía y al Honorable Congreso de la Nación en todo lo referente al régimen de cambios y establecer las reglamen-

taciones de carácter general que correspondiesen, las que serán implementadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y de alcance obligatorio para los entes públicos y privados;

- b) Dictar las normas de cambios y ejercer o hacer ejercer a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la fiscalización que su cumplimiento exija.

## Capítulo VIII

### *Emisión de moneda y reservas en oro y divisas*

Art. 30. — El Banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina y ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda.

Art. 31. — Los billetes y monedas del banco tendrán curso legal, en los términos de la ley 23.928, en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en ellos. Los billetes llevarán el facsímil de la firma del presidente del banco y del funcionario que designe el directorio o de quienes los reemplacen en sus funciones.

Art. 32. — Toda vez que el banco compruebe la violación de su función exclusiva de emitir moneda deberá denunciar el hecho ante el Poder Ejecutivo nacional para que éste tome las medidas que correspondan.

Art. 33. — Hasta una tercera parte de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común, podrán estar integradas con títulos públicos valuados a precio de mercado.

El banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera.

## Capítulo IX

### *Cuentas, estados contables y fiscalización*

Art. 34. — El ejercicio financiero del banco durará un (1) año y se cerrará el 31 de diciembre. Los estados contables del banco deberán ser elaborados de acuerdo a normas generalmente aceptadas, siguiendo los mismos principios generales que sean establecidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para el conjunto de entidades.

Art. 35. — El banco publicará a más tardar dentro de la semana siguiente, los estados resumidos de su activo y pasivo al cierre de operaciones de los días siete (7), quince (15), veintitrés (23) y último de cada mes.

Art. 36. — La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones de esta carta orgánica y demás normas aplicables será fiscalizada por un síndico titular y uno adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado. Sus actua-



ciones comprenderán a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Los síndicos podrán ser un abogado, un contador público nacional o un licenciado en economía. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, al término de los cuales podrán ser designados nuevamente.

Los síndicos dictaminarán sobre los balances y cuentas de resultados de fin de ejercicio, para lo cual tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco. Informarán al directorio, al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación sobre la observancia de esta ley y demás normas aplicables. Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que se fije en el presupuesto del banco.

Art. 37. — No podrán desempeñarse como síndicos:

- a) Quienes se hallen inhabilitados para ser directores;
- b) Los cónyuges, parientes por consanguinidad en línea directa, los colaterales hasta cuarto grado inclusive y los afines dentro del segundo, de las autoridades mencionadas en los artículos 6º, 16 y 44.

## Capítulo X

### Utilidades

Art. 38. — Las utilidades realizadas y líquidas se afectarán prioritariamente a la capitalización del Banco.

Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el Fondo de Reserva General y para los Fondos de Reserva Especiales hasta que los mismos alcancen el cincuenta (50) por ciento del capital del Banco. Una vez alcanzado este límite, las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los Fondos de Reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional.

Las pérdidas realizadas por el Banco en un ejercicio determinado, se imputarán a las reservas que se hayan constituido en ejercicios precedentes, y si ello no fuera posible, afectarán al capital de la institución, en cuyo caso el gobierno nacional deberá hacer el aporte correspondiente para restituirlo durante el año fiscal siguiente.

### Auditoría externa

Art. 39. — Los estados contables del Banco deberán contar con la opinión de auditores externos, designados por el Directorio entre aquellos que se encuentren inscritos en un registro especial, el cual ha de ser creado y reglamentado por el Directorio. Las firmas que efectúan las tareas de auditoría no podrán prestar el servicio por más de cuatro (4) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que hayan transcurrido por lo menos otros cuatro (4) períodos.

Las informaciones que obtiene la auditoría externa del Banco con respecto a las entidades financieras en particular, tienen carácter secreto y no podrán darlas a conocer sin autorización expresa del Banco.

El informe de los auditores externos deberá ser elevado por el Directorio tanto al Poder Ejecutivo nacional como al Honorable Congreso de la Nación; en el caso de este último, se deberá concretar en ocasión de la remisión del informe anual que dispone el artículo 10, inciso t).

### Tribunal de Cuentas

Art. 40. — Las disposiciones de la Ley de Contabilidad sólo son de aplicación al Banco en cuanto a la verificación de que las erogaciones encuadren en el presupuesto y a la rendición de cuentas documentadas que, en plazos no superiores a un (1) año, deberá presentar al Tribunal de Cuentas de la Nación.

Art. 41. — Las utilidades del Banco Central de la República Argentina no están sujetas al impuesto a las ganancias. Los bienes y las operaciones del Banco reciben el mismo tratamiento impositivo que los bienes y actos del gobierno nacional.

### Información económica

Art. 42. — Incumbe al banco compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias y financieras así como los balances de pagos y las cuentas nacionales de la República Argentina.

El banco podrá realizar, asimismo, investigaciones técnicas sobre temas de interés para la política monetaria, cambiaria y financiera.

## Capítulo XI

### Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

Art. 43. — El Banco Central de la República Argentina ejercerá la supervisión de la actividad financiera y cambiaria por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la que dependerá directamente del presidente de la institución.

Art. 44. — La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias es un órgano desconcentrado, presupuestariamente dependiente del Banco Central y sujeto a las auditorías que el mismo disponga. Su administración estará a cargo de un superintendente, un vicesuperintendente y los subgerentes generales de las áreas que la integren.

El vicesuperintendente ejercerá las funciones del superintendente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el superintendente le asigne o delegue.

Art. 45. — El superintendente y el vicesuperintendente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del presidente del banco. Deberán reunir las mismas condiciones que establece esta ley para los directores del banco y no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad dispuestas para los mismos. La duración en sus funciones será de cuatro (4) años. Sólo podrán ser reemplazados en sus cargos por las mismas causales que los directores del banco.

Art. 46. — Al superintendente le corresponde, en el marco de las políticas generales fijadas por el directo-

rio del banco y poniendo en conocimiento del mismo las decisiones que se adopten, las siguientes funciones:

- a) Autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias y la de filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras;
- b) Autorizar la apertura de sucursales de entidades financieras y los proyectos de fusión de las mismas;
- c) Aprobar las transferencias de acciones que según la Ley de Entidades Financieras requieran autorización del banco;
- d) Calificar a las entidades financieras a los fines de la Ley de Entidades Financieras;
- e) Cancelar la autorización para operar en cambios;
- f) Aprobar los planes de regularización y/o saneamiento de las entidades financieras;
- g) Implementar y aplicar las normas reglamentarias de la Ley de Entidades Financieras, dictadas por el directorio del banco;
- h) Establecer los requisitos que deben cumplir los auditores de las entidades financieras y cambiarias.

Art. 47. — Son facultades propias del superintendente:

- a) Establecer el régimen informativo y contable para las entidades financieras y cambiarias;
- b) Disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, estados de deudores y demás informaciones que sirvan para el análisis de la situación del sistema;
- c) Ordenar a las entidades que cesen o desistan de llevar a cabo políticas de préstamos o de asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de las mismas;
- d) Dictar normas para la obtención, por parte de las entidades financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, obligaciones y otros títulos, tanto en el mercado local como en los externos;
- e) Declarar la extensión en la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella, cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria, cambiaria o crediticia, previa consulta con el presidente del banco;
- f) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras, por infracciones cometidas por las personas o entidades, o ambas a la vez, a las disposiciones de la misma, y
- g) Ejercer las demás facultades que las leyes otorgan al banco relativas a la Superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta ley al directorio del banco.

Art. 48. — En su carácter de administrador, son también atribuciones del superintendente:

- a) Establecer las normas para la organización y gestión de la superintendencia, y

- b) Nombrar, promover y separar al personal de la superintendencia, de acuerdo con las normas que se dicten a dichos efectos y disponer la sustanciación de sumarios.

Art. 49. — El superintendente podrá, previa autorización del presidente del banco, disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una o varias entidades financieras, por un plazo máximo de treinta (30) días. De esta medida se deberá dar posterior cuenta al directorio.

Durante este período serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá la exigibilidad y devengamiento de sus intereses. La suspensión transitoria de operaciones, en ningún caso dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el banco o el Estado federal.

Por intermedio del presidente del banco, el superintendente podrá solicitar al directorio se revoque la autorización para operar de una entidad financiera o se disponga su liquidación. En tal caso el directorio deberá evaluar tal solicitud en un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir del momento de la solicitud. Este plazo será prorrogable, por una única vez, por otros quince (15) días corridos.

Art. 50. — La superintendencia podrá requerir, de las empresas y personas comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, la exhibición de sus libros y documentos, pudiendo disponer el secuestro de la documentación y demás elementos relacionados con transgresiones a dichas normas.

Art. 51. — La superintendencia podrá requerir de las entidades financieras, casas y agencias, oficinas y corredores de cambio, exportadores e importadores u otras personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros y documentos, el suministro de todas las informaciones y documentación relacionadas con las operaciones que hubieren realizado o en las que hubieren intervenido y disponer el secuestro de los mismos y todo otro elemento relacionado con dichas operaciones.

Art. 52. — La superintendencia se encuentra facultada para formular los cargos ante los fueros correspondientes por infracciones a las normas cambiarias y financieras y para solicitar embargos preventivos y demás medidas precautorias por los importes que se estimen suficientes para garantizar las multas y reintegros que sean impuestos por juez competente.

Art. 53. — Las informaciones que obtiene la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen carácter secreto. Los funcionarios y empleados intervinientes no deben darlas a conocer sin autorización expresa de la superintendencia, aun después de haber dejado de pertenecer a la misma.

Art. 54. — La Superintendencia podrá requerir el auxilio de la fuerza pública si encuentra obstáculos o resistencia en el cumplimiento de las funciones de inspección a su cargo. Deberá además requerir, sin demora, de los tribunales competentes, las órdenes de allanamiento que sean necesarias.

## Capítulo XII

### Jurisdicción

Art. 55. — El Banco Central de la República Argentina, está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio, la competencia nacional será concurrente con la de la justicia ordinaria de las provincias. El banco podrá, asimismo, prorrogar jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Art. 56. — El presidente del banco y el superintendente podrán absorber posiciones en juicio por escrito, no estando obligados a hacerlo personalmente.

## Capítulo XIII

### Disposiciones transitorias

Art. 57. — Las operaciones crediticias vigentes al momento de promulgarse la presente ley deberán estar detalladas en un balance inicial y, durante los plazos que se establezcan para su recuperación final, no estarán sujetas a las restricciones generales que sobre este tipo de operaciones se fijan en la presente ley.

Art. 58. — El primer directorio que sea designado de acuerdo con lo prescripto por esta ley, con la excepción del presidente y vicepresidente, dispondrá a través de un sorteo que la mitad de sus integrantes permanezcan en funciones sólo por medio período. Una vez alcanzado el mismo, quienes lo reemplacen serán designados por un mandato completo de seis (6) años, mediante el procedimiento establecido en el artículo 7º.

Art. 59. — Los miembros del directorio y de la sindicatura que se hallen en funciones al promulgarse la presente ley, continuarán ejerciéndolas hasta que sean confirmados en sus cargos por el procedimiento establecido en el artículo 7º o se proceda a su reemplazo.

Art. 60. — Deróganse a partir de la vigencia de esta Carta Orgánica la ley 21.572 (creación de la Cuenta de Regulación Monetaria) y el decreto 4.611/58 (Fiscalización del Régimen Cambiario por el Banco Central), ratificado por la ley 14.497.

Art. 61. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con el artículo 111 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 29 de octubre de 1991.

Juan Carlos Romero. — Rogelio J. Nieves.  
— Alberto J. Rodríguez Saá. — José O. Figueroa. — Eduardo P. Vaca. — Luis Rubeo. — Julio A. Amoedo. — Felipe Ludueña.

En disidencia según anexo:

Juan Trilla. — Ricardo E. Lafferrière. — Hipólito Solari Yrigoyen. — Conrado Storani.

## Anexo al dictamen de las comisiones sobre el proyecto de ley S.-719/91 sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina

### Modificaciones propuestas

1. Modifícase el artículo 3º de la siguiente forma:
  - 1.1. Incorpórase en el segundo párrafo luego de "reserva de va'or" la expresión "unidad de cuenta".
  - 1.2. Elimínase el tercer párrafo.
2. Modifícase el artículo 4º de la siguiente forma:
  - 2.1. Sustitúyese el inciso a) por el siguiente:
    - a) "Regular la evolución del crédito y observar la cantidad de dinero en la economía".
  - 2.2. Sustitúyese el inciso d) por el siguiente:
    - d) "Ejecutar la política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía con asesoramiento del Banco Central de la República Argentina, concentrar y administrar, en su carácter de agente financiero del estado federal, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos".

3. Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente:

Artículo 5º: "El capital del banco quedará establecido en el balance inicial que se elevará al Congreso de la Nación para su aprobación en el momento de promulgarse esta ley quedando supeditada su vigencia a la sanción de dicha norma complementaria. Al final de cada ejercicio anual el directorio procederá a su ajuste capitalizando las ganancias líquidas y realizadas si las hubiere".

4. Sustitúyese la última frase del artículo 6º por la siguiente:

Artículo 6º: "Deberán tener probada idoneidad en materia económica, monetaria, bancaria o legal —vinculada ésta al área financiera— y gozar de reconocida solvencia moral".

5. Elimínase al final del primer párrafo del artículo 7º la expresión "dicho período será contado a partir de la sanción de la presente ley".
6. Incorpórase en el primer párrafo del artículo 14, a continuación de la palabra "determina" la expresión "la ejecución de".
7. Sustitúyese el artículo 16 por el siguiente:

Artículo 16: "La administración del banco será ejercida por intermedio de un gerente general y tres subgerentes generales, con un área específica cada uno, los cuales deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán reunir los mismos requisitos de idoneidad que los directores.

El gerente general y los subgerentes generales son los asesores del directorio y en tal carácter asistirán a las reuniones, a pedido del presidente o del directorio. Dependen directamente del presidente. Son responsables del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación, previa aprobación por el mismo, podrán dictar las reglamentaciones internas que fueran necesarias. Asimismo, deberán mantener informado al presidente sobre la marcha del banco".

8. En el artículo 19 eliminanse los incisos d), i) y k).

9. Elimínase el segundo párrafo del artículo 20.

10. Elimínase el segundo párrafo del artículo 28.

11. Incorpórase en el artículo 29 un nuevo inciso con el siguiente texto:

Inciso c): "Entender en el ingreso de las divisas provenientes de las exportaciones y otros conceptos y en su asignación para el pago de importaciones, servicios y otras rémesas".

12. Sustitúyese el artículo 36 por el siguiente:

Artículo 36: "La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones de esta Carta Orgánica y demás normas aplicables será fiscalizada por una comisión fiscalizadora de tres miembros, nombrados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado. Sus actuaciones comprenderán a la superintendencia de entidades financieras y cambiarias.

Los síndicos serán un abogado, un contador público y un licenciado en economía. Durarán cuatro años en sus funciones, al término de las cuales podrán ser designados nuevamente".

13. Sustitúyese el título "Tribunal de cuentas" a continuación del artículo 39 por el siguiente:

#### *Del órgano de contralor externo*

Artículo 40: "El control externo posterior de la gestión administrativa, presupuestaria y económica del Banco Central de la República Argentina estará a cargo del órgano de contralor externo del sector público, que auditará y emitirá dictamen sobre los estados contables financieros independientemente de la auditoría externa anual prevista por el artículo 39".

Artículo 41: Sin modificación.

14. Incorpórase a partir del artículo 58 la expresión:

"El presidente y vicepresidente cesarán en sus funciones el 10 de diciembre de 1995".

15. Incorpórase a partir del artículo 59 dos nuevos artículos:

Artículo 60: "La garantía de los depósitos en el sistema de entidades financieras privadas será uni-

versal y limitada a un monto de cien millones de australes. El Poder Ejecutivo de la Nación remitirá, en un plazo de treinta días de promulgarse la presente ley, un proyecto que contemple el régimen definitivo de garantía de depósitos".

Artículo 61: "Hasta tanto se sancione una ley que disponga la creación de un ente que asuma las funciones de regulación y fomento de comercio exterior, quedan vigentes y restringidas al cumplimiento de dichas funciones las normas que facultan al Banco Central de la República Argentina a conceder descuentos y otros mecanismos promocionales, los que únicamente podrán ser usados para incentivar las exportaciones no tradicionales".

16. Adécuese la numeración del articulado a las modificaciones propuestas.

*Juan Trilla. — Hipólito Solari Yrigoyen.*

### ANTECEDENTE

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### Capítulo I

#### *Caracteres institucionales*

##### *Naturaleza*

Artículo 1º—El Banco Central de la República Argentina es una institución autárquica de la Nación. El gobierno federal garantiza todas las obligaciones del banco.

##### *Misión*

Art. 2º—Es responsabilidad directa y primaria del Banco Central desarrollar una política monetaria y crediticia dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como medio general de cambio, unidad de cuenta, reserva de valor e instrumento de pago de las obligaciones monetarias.

##### *Capital*

Art. 3º—El Poder Ejecutivo fijará el capital del banco al promulgar la presente ley. El capital podrá ser aumentado ulteriormente por el Poder Ejecutivo a solicitud del banco.

##### *Sede y filiales*

Art. 4º—El Banco Central tiene domicilio en la Capital de la República. Puede establecer sucursales y agencias y designar corresponsales en el país y en el exterior.

El banco debe tener por lo menos una sucursal en cada provincia. Mediante convenio con las respectivas instituciones, puede utilizar para ese fin otros establecimientos bancarios nacionales o provinciales.

## Capítulo II

### Estructura

#### Organos directivos

Art. 5º — Son órganos de gobierno del Banco Central:

- a) El directorio nacional, y
- b) Los directorios regionales.

#### Directorio nacional: atribuciones

Art. 6º — El directorio nacional determina la política monetaria y crediticia del banco.

Corresponde asimismo al directorio nacional:

- a) Establecer el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos;
- b) Aprob~~ar~~ el balance general, la cuenta de resultados y la memoria;
- c) Designar al personal superior, a propuesta del presidente del banco;
- d) Dictar el estatuto del personal;
- e) Crear y suprimir sucursales y agencias;
- f) Nombrar corresponsales;
- g) Establecer las denominaciones y características de los billetes y monedas;
- h) Fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones crediticias del banco;
- i) Prescribir requisitos de encaje;
- j) Reglamentar la creación y funcionamiento de cámaras compensadoras;
- k) Ejercer las facultades y poderes que asignan al banco esta ley, la legislación sobre entidades financieras y otras normas legales;
- l) Resolver sobre todos los asuntos que, no estando explícitamente reservados a otros órganos, el presidente del banco somete a su consideración.

Art. 7º — Competen al directorio nacional las decisiones respecto de la posición cambiaria y el balance de pagos, las operaciones de mercado abierto y las relaciones con el gobierno federal.

Art. 8º — Las resoluciones del directorio nacional se toman por simple mayoría de votos emitidos. En caso de empate el presidente tiene doble voto. Por vía de reglamentación puede el directorio establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importancia.

#### Directorio nacional: composición

Art. 9º — El directorio nacional está integrado por:

- a) El presidente del banco, el vicepresidente del banco y cinco directores;
- b) Los presidentes de los directorios regionales del banco.

Art. 10. — Los miembros del directorio nacional comprendidos en el inciso a) del artículo anterior, deben tener conocimientos especializados en materia monetaria y financiera. Deben ser argentinos nativos o por natura-

lización con no menos de diez años de ejercicio de la ciudadanía.

Son designados por el Poder Ejecutivo de la Nación y duran ocho años en sus funciones, al término de los cuales no pueden ser designados nuevamente. Dedicán todo su tiempo a los asuntos del banco, con exclusión de cualquier otra actividad rentada.

Art. 11. — Son funciones del presidente del banco:

- a) Convocar y presidir las reuniones del directorio nacional;
- b) Nombrar y remover al personal del banco cuya designación no corresponda al directorio nacional;
- c) Dirigir la administración del banco.

El vicepresidente asiste al presidente en el desempeño de sus funciones y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento.

#### Directorios regionales: atribuciones

Art. 12. — Corresponde a cada directorio regional:

- a) Asesorar al directorio nacional y a las autoridades ejecutivas del banco sobre la situación económica de su distrito;
- b) Informar al presidente del banco sobre el desenvolvimiento de las sucursales y agencias y sobre la necesidad de nuevas sucursales o agencias en su distrito;
- c) Resolver sobre adelantos, redescuentos y otras operaciones de banca central con instituciones de su distrito, exceptuando las operaciones reservadas al directorio nacional.

Art. 13. — En el uso de las facultades conferidas por el inciso c) del artículo precedente, cada directorio regional se ajustará a las condiciones y límites que establezca el directorio nacional del banco.

Si un directorio regional se apartase de dichas condiciones y límites, el directorio nacional podrá suspender por el tiempo que estimara necesario el ejercicio de las mencionadas facultades por parte de ese directorio regional.

Durante el tiempo de la suspensión, el directorio nacional resolverá directamente sobre las operaciones de banca central relativas a ese distrito.

Art. 14. — Cada directorio regional toma sus decisiones por simple mayoría de votos emitidos. El directorio nacional puede establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de especial importancia sujetos a la decisión de los directorios regionales.

#### Directorios regionales: composición.

Art. 15. — Cada directorio regional está integrado por tantos miembros cuantas provincias comprende el distrito de su jurisdicción.

Para ese fin el territorio de la República se divide en cinco distritos, de acuerdo con sus características económicas regionales. Cada distrito incluye no menos de tres ni más de seis provincias.

La determinación inicial de los distritos se hará mediante decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. Ulteriormente sólo podrá ser modificado por resolución del directorio nacional del banco.

Art. 16. — Los miembros de los directorios regionales deben poseer amplios conocimientos de la economía de la región en la que ejercen sus funciones. Deben ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de dos años de residencia en el distrito.

Son designados por el Poder Ejecutivo de la Nación a propuesta de los gobiernos de las provincias respectivas. Duran ocho años en sus funciones, al término de los cuales no pueden ser designados nuevamente. Dedicán todo su tiempo a los asuntos del banco, con exclusión de cualquier otra actividad rentada.

Art. 17. — Cada directorio regional elige entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. Puede disponer que la presidencia y la vicepresidencia sean rotativas.

El presidente del directorio regional preside sus sesiones y representa al distrito en el directorio nacional del banco. Es reemplazado por el vicepresidente del directorio regional en caso de ausencia o impedimento.

#### *Gerencia general*

Art. 18. — La administración del banco es ejercida por intermedio del gerente general y los subgerentes generales.

El gerente general y los subgerentes generales son responsables del cumplimiento de las decisiones del directorio nacional, de los directores regionales y del presidente del banco. Dictan las reglamentaciones internas e imparten las instrucciones necesarias para la ejecución de esas decisiones.

El gerente general y los subgerentes generales tienen participación consultiva en las sesiones del directorio nacional. Con el mismo carácter pueden asistir a las sesiones de los directorios regionales.

El gerente general y los subgerentes generales sólo pueden ser separados de sus cargos por mal desempeño o por haber incurrido en inhabilidad legal.

#### *Remuneraciones*

Art. 19. — La retribución del presidente del banco será igual a la que en el gobierno federal recibe un secretario de Estado.

La retribución del vicepresidente del Banco y de los presidentes de los directorios regionales será igual a la que en el gobierno federal recibe un subsecretario.

Las retribuciones de las demás autoridades y del personal serán las que fije el presupuesto del banco.

### Capítulo III

#### *Funciones*

#### *Emisión monetaria*

Art. 20. — Sólo el Banco Central de la República Argentina está autorizado para acuñar monedas y emitir billetes de curso legal en el territorio de la Nación.

Ninguna otra institución o persona pública o privada emitirá, librará o aceptará pagarés, letras de cambio o documentos de cualquier naturaleza extendidos al portador y a la vista.

El Banco Central puede exceptuar de esta prohibición los cheques o giros pagaderos por un banco.

#### *Medios de política monetaria y crediticia*

Art. 21. — Con el objeto de influir sobre la circulación monetaria y el volumen del crédito, el Banco Central puede efectuar las operaciones que juzgue adecuadas para ese propósito en los mercados activos financieros y reales. En particular está facultado para:

- a) Recibir depósitos en moneda nacional y extranjera;
- b) Obtener créditos;
- c) Emitir títulos y bonos, así como certificados de participación en sus tenencias de valores;
- d) Redescantar a las entidades financieras documentos provenientes de sus operaciones de crédito;
- e) Otorgar adelantos y otros préstamos a las instituciones financieras;
- f) Comprar y vender títulos públicos en el mercado de valores;
- g) Comprar y vender oro y divisas.

Art. 22. — La cartera de valores públicos del Banco Central no excederá del quince por ciento del monto de dichos valores en circulación, calculado a precios corrientes.

Este límite puede ampliarse mediante la afectación de reservas especiales o con el voto unánime de los miembros del directorio nacional del banco.

Art. 23. — Con el objeto de influir sobre la circulación monetaria y el volumen del crédito, el Banco Central puede exigir que las instituciones financieras mantengan en efectivo determinadas proporciones de los depósitos u otros pasivos patrimoniales.

En ningún caso el encaje obligatorio lo excederá del quince por ciento del total de los pasivos afectados.

#### *Prohibiciones*

Art. 24. — Queda prohibido al banco:

- a) Conceder préstamos al gobierno federal, a las provincias e instituciones públicas más allá de los límites que la Ley de Presupuesto de la Nación fije anualmente;
- b) Conceder préstamos a personas físicas o jurídicas no autorizadas para operar como entidades financieras;
- c) Efectuar redescuentos, adelantos u otras operaciones de crédito en condiciones tales que signifiquen el otorgamiento de subvenciones o subsidios;
- d) Adquirir acciones o cuotas de capital, salvo las correspondientes a organismos financieros internacionales;
- e) Comprar inmuebles, excepto los necesarios para el funcionamiento del banco.

El inciso a) no incluye las operaciones de mercado abierto para fines exclusivos de política monetaria y crediticia.

#### *Información económica*

Art. 25. — Incumbe al banco compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias y financieras así como los balances de pagos y las cuentas nacionales de la República Argentina.

El banco realiza asimismo investigaciones técnicas sobre temas de interés para la política monetaria y crediticia de la Nación.

Art. 26. — El Banco Central informa periódicamente al Poder Ejecutivo de la Nación sobre la situación monetaria y crediticia.

El Ministerio de Economía informa periódicamente al banco en forma detallada sobre el movimiento de entradas y salidas de la Tesorería General de la Nación, los gastos comprometidos y el estado de la deuda consolidada y flotante.

El banco puede solicitar del Ministerio de Economía y de los demás ministerios y organismos públicos las informaciones que considere necesarias para el cumplimiento de su misión.

#### *Actividades de supervisión*

Art. 27. — El Banco Central puede requerir de las empresas y personas comprendidas en la legislación sobre instituciones financieras o en el régimen cambiario la exhibición de sus libros y documentos. El banco puede disponer el secuestro de la documentación y demás elementos relacionados con transgresiones a dichas normas.

Art. 28. — Las informaciones que obtiene el banco en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen carácter secreto. Los funcionarios y empleados intervinientes no deben darlas a conocer sin permiso formal del banco, aun después de haber dejado por cualquier causa de pertenecer a su personal.

Art. 29. — El Banco Central puede requerir el auxilio con la fuerza pública si encuentra obstáculos o resistencia en el cumplimiento de las funciones de inspección a su cargo.

Puede asimismo el banco recabar de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, que deben emitirse sin demora bajo la responsabilidad de los funcionarios solicitantes.

Art. 30. — El Banco Central se halla facultado para instruir sumarios e imponer sanciones administrativas por inobservancia de las normas cuya aplicación le corresponde o de las dictadas por el en virtud de sus poderes legales.

En cualquier estado de las actuaciones el banco puede solicitar embargos u otras medidas precautorias para asegurar el pago de las multas y reintegros que deban satisfacer los transgresores.

### **Capítulo IV**

#### *Relaciones con el gobierno*

##### *Independencia del Banco Central*

Art. 31. — En la formulación y ejecución de la política monetaria y crediticia el Banco Central no está

sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del Estado, con excepción del Congreso de la Nación.

El Banco Central no debe asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar, sin autorización expresa del Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.

#### *Colaboración con el gobierno*

Art. 32. — El Banco Central asesora al Poder Ejecutivo de la Nación sobre asuntos de importancia para la política monetaria y crediticia.

El Poder Ejecutivo debe dar al presidente del banco oportunidad de participar con carácter consultivo en las reuniones que realice sobre asuntos de importancia para la política monetaria y crediticia.

El ministro de Economía del Poder Ejecutivo de la Nación puede participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio nacional del banco.

Art. 33. — Si el Poder Ejecutivo de la Nación estima que la política monetaria y crediticia aplicada por el Banco Central se aparta de la misión que esta ley asigna al banco, o si juzga que dicha política no es compatible con la política económica general del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía y el directorio nacional del banco procurarán llegar a un acuerdo.

Si el ministro de Economía y el directorio no arriban a un acuerdo, el directorio presentará al ministro una exposición escrita sobre el tema y el ministro formulará una recomendación escrita. Ambos documentos serán remitidos inmediatamente por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, para conocimiento y resolución del Congreso.

#### *Depósitos y pagos del gobierno*

Art. 34. — Directamente o por medio de otros bancos el Banco Central recibe en depósito los fondos del gobierno federal y de sus reparticiones autárquicas y efectúa pagos por cuenta de ellos.

El Banco Central no paga interés sobre los depósitos del gobierno y sus reparticiones ni percibe remuneración por los pagos que realiza por cuenta de ellos, pero puede cobrarles las sumas que a su vez haya abonado a otros bancos.

#### *Deuda pública*

Art. 35. — El banco actúa por cuenta del gobierno federal en la colocación de empréstitos públicos y en la atención de los servicios de la deuda pública interna y externa.

Puede colocar los valores públicos en venta directa, en el mercado o mediante consorcios financieros. Está facultado para promover y fiscalizar dichos consorcios así como para integrarlos, caso en el cual asume la dirección, pero no debe tomar subscripciones "al firme".

El banco cobra comisión por los servicios mencionados, cuyo importe carga a la Secretaría de Estado de Hacienda.

Art. 36. — Toda venta o compra de valores públicos por bancos oficiales, cajas nacionales de previsión y

otras instituciones o empresas que pertenecen total o mayoritariamente al Estado federal deben efectuarse por intermedio del banco.

Art. 37. — El banco puede convenir con los agentes fiscales o pagadores las medidas que juzgue apropiadas para la debida atención de los servicios de la deuda pública.

El gobierno federal debe poner regularmente a disposición del banco los recursos necesarios para la atención de los servicios de la deuda pública y reintegrarle los gastos que ocasionen tales servicios.

Art. 38. — El Banco Central debe informar detalladamente al ministro de Economía sobre el desempeño de sus funciones relativas a la deuda pública y facilitarle el examen de los libros, registros y demás documentos referentes a esas operaciones.

#### *Bancos nacionales*

Art. 39. — El Banco Central efectúa anualmente la auditoría general del Banco de la Nación Argentina, del Banco Nacional de Desarrollo, del Banco Hipotecario Nacional y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, e informa de sus conclusiones al Poder Ejecutivo de la Nación.

### Capítulo V

#### *Cuentas y estados*

##### *Gestión patrimonial*

Art. 40. — El ejercicio financiero del Banco Central dura un año y se cierra el 31 de diciembre.

Además de los balances y cuentas de resultados de fin de ejercicio, el banco publica resúmenes de sus activos y pasivos así como de sus ingresos y egresos de caja los días 7, 15, 23 y último de cada mes.

##### *Sindicatura*

Art. 41. — La observancia por el Banco Central de las disposiciones de esta carta orgánica y demás normas aplicables es fiscalizada por un síndico designado por el Poder Ejecutivo de la Nación.

El síndico debe ser abogado, doctor en ciencias económicas o contador público nacional. Dura cuatro años en sus funciones, al término de las cuales puede ser designado nuevamente.

Para el cumplimiento de su cometido el síndico tiene acceso a todos los libros, registros y documentos concernientes a las operaciones del banco.

El síndico acompaña con su firma los balances y cuentas de resultados de fin de ejercicio e informa al directorio nacional del banco y al Poder Ejecutivo sobre la gestión patrimonial de la institución.

##### *Tribunal de cuentas*

Art. 42. — Las disposiciones de la Ley de Contabilidad son de aplicación al banco en cuanto a la verificación de que las erogaciones encuadran en el presupuesto y a la rendición de cuentas documentadas que, en plazos no superiores a un año, debe presentar el banco al Tribunal de Cuentas de la Nación.

#### *Utilidades*

Art. 43. — Las utilidades realizadas y líquidas que resulten al cierre de cada ejercicio se destinan:

- a) 50 por ciento al fondo de reserva general y a las reservas especiales que determine el banco;
- b) 50 por ciento a aumentar el capital del Banco Nacional de Desarrollo, por cuenta del gobierno federal.

#### *Impuestos*

Art. 44. — Las utilidades del Banco Central no están sujetas al impuesto a las ganancias. Los bienes y las operaciones del banco reciben el mismo tratamiento impositivo que los bienes y los actos del gobierno federal.

Art. 45. — Derógase la ley 20.539 con las disposiciones de facto 21.364, 21.547, 21.571, 21.757, 22.467, 22.602 y toda disposición que se oponga a la presente.

Art. 46. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Juan C. Romero.*

### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto que presento, destinado a sustituir totalmente la actual ley orgánica del Banco Central de la República Argentina, es obra del profesor doctor Julio H. G. Olivera, profesor titular de Teoría Económica y director del Instituto de Investigaciones Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Es, en la actualidad, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y miembro titular de la "Académie Internationale des Sciences Politiques", de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y de la Academia Nacional de Ciencias. Es ex miembro del Club de Roma. El presidente de Francia le ha conferido la condecoración académica de *commandeur*, *Palme Académiques*.

En el campo económico, académico y del Estado, ha sido subgerente general del Banco Central, consultor de las Naciones Unidas, rector de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Unión Latinoamericana de Universidades, miembro del Consejo y Comité Ejecutivo de la International Economics Association, y del Council de la Econometric Society, presidente de la comisión asesora en ciencias sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Fue investigador y profesor visitante en las universidades de Chicago y Göttingen, y en 1968 la Universidad de Yale lo invitó a desempeñar la cátedra de "Irving Fisher".

Su obra y su actuación han merecido los premios universitarios, Tedín Uriburu, Cámara Júnior, Fundación Bunge y Born, Fundación Ovidio Giménez y Latinoamericano en Ciencias Sociales "Provincia de Santa Fe".



En orden al contenido del proyecto cabe señalar que tanto la teoría económica como la evidencia empírica, ponen de manifiesto la importancia de las condiciones monetarias en el proceso de crecimiento económico. Misión de todo Banco Central es crear y preservar un marco monetario adecuado para el crecimiento de la actividad productiva; y, en especial, asegurar la existencia de un instrumento monetario que realice plenamente las funciones primordiales del dinero como medio de circulación y de pago, unidad de valor y activo patrimonial.

De acuerdo con las normas de la Constitución, la facultad de emitir dinero pertenece al Congreso. El Banco Central, como instituto emisor, actúa por delegación del Poder Legislativo; es, por decirlo así, el brazo ejecutor de las decisiones monetarias del Congreso. En el cumplimiento de su cometido no debe estar subordinado a ningún otro poder. La independencia del Banco Central representa la lógica contrapartida de las atribuciones constitucionales del Congreso de la Nación.

Tan importante como la independencia del instituto emisor, es la coordinación entre la política monetaria y la política económica general. Al Congreso corresponde la última palabra en las divergencias que puedan suscitarse entre el Banco Central y el Ministerio de Economía respecto de la orientación y contenido de la política monetaria. El papel que incumbe al Congreso como árbitro de tales diferencias no sólo se basa sobre sus facultades constitucionales específicas en el terreno monetario, sino sobre su competencia genérica para "proveer lo conducente a la prosperidad del país" (Constitución Nacional, artículo 67, inciso 16).

Además de agente emisor y órgano de la política monetaria, todo banco central es "banco de bancos". La eficiencia de la actividad bancaria es tanto mayor, en general, cuanto más próxima su localización respecto al destinatario del crédito. De esto resulta la conveniencia de la descentralización territorial de los servicios bancarios y, por consiguiente, de la banca central como proveedora de asistencia crediticia. Aparte de las razones técnicas en que se funda, la descentralización geográfica de la banca central fortalece el federalismo ampliando y afianzando su base de sustentación económica.

Descentralización no es lo mismo que desmenbramiento. Existe una relación de mutua complementariedad entre las funciones que competen a todo banco central, como órgano de la política monetaria y crediticia, instituto emisor y banco de bancos. Tales funciones deben ser ejercidas conjuntamente. La célebre regla de Ockam, según la cual los entes no deben multiplicarse sin necesidad, es de estricta aplicación en materia monetaria y crediticia.

Los medios fundamentales de regulación monetaria y crediticia son el redescuento, las operaciones de mercado abierto y los cambios en los requisitos de encaje. La acción de banco central debe servirse preferentemente de los dos primeros instrumentos mencionados. Las variaciones amplias y frecuentes de las reservas requeridas crean incertidumbre en el mercado del crédito. Para evitarlo es preciso que las facultades

del Banco Central por lo concerniente a exigencias de efectivo mínimo sean restringidas por la ley.

La época de las panaceas monetarias ha pasado, pero igualmente han quedado superadas las concepciones unilaterales que subestimaban la influencia de los factores monetarios en el proceso económico. Hoy se reconoce como verdad incontestable que la falta de estabilidad monetaria es un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas. En este sentido, un banco central organizado y conducido adecuadamente puede contribuir en alto grado al progreso económico de la República y al bienestar de todos sus habitantes.

*Juan C. Romero.*

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente, señores senadores: el proyecto que estamos tratando, como lo indica el dictamen, está basado en una iniciativa que presenté en el primer semestre de 1989. En tal sentido, este proyecto fue elaborado con la idea de que la Carta Orgánica del Banco Central se ajustara a lo que nuestra Constitución indica.

En el segundo semestre de 1989 aprobamos la ley 23.697, que puso en funcionamiento el poder de policía de emergencia del Estado nacional. En el artículo 3° de esa norma se estableció la creación de una comisión especial para la elaboración de una nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, determinando ciertas pautas a las cuales debía atenerse dicha Carta Orgánica.

La comisión estuvo integrada por el presidente y el vicepresidente del Banco Central, por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía, del Senado y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados; además del secretario de Estado de Coordinación Económica.

Como dije, la Ley de Emergencia Económica estableció distintas pautas a las que debía atenerse la nueva Carta del Banco Central. En primer lugar, se determinó que la independencia funcional de dicho organismo es indispensable para cumplir su primordial misión de preservar el valor de la moneda.

Además, se estableció que no se debería prever ningún financiamiento de dicho banco, directo ni indirecto, ya fuera al Estado nacional o a las provincias, más allá de lo que la Carta Orgánica determinara.

Se habló de crear un sistema de garantía de depósitos que reemplace al actual; de fijar un

ente vinculado con la liquidación de los activos de entidades financieras en proceso de disolución; de crear un nuevo sistema que asegure la superintendencia de bancos, el establecimiento de pautas para que el Banco Central informe semestralmente al Congreso sobre la sujeción al proyecto o la ejecución y proyección del programa monetario, dentro de la política legislativa que estableciera el Parlamento nacional. Además, esta Carta Orgánica debería obligar al Banco Central a publicar semanalmente su balance.

Esta comisión trabajó durante el tiempo que la ley prescribía. Lo hicimos durante las dos gestiones, tanto en la de Javier González Fraga como en la de Roque Fernández, y colaboraron no sólo los miembros de la comisión sino también distintos funcionarios, directores del Banco Central. Como resultado de esa tarea se ha llegado a este dictamen que hoy analizaremos.

En primer término, deseo considerar el encuadre constitucional por el cual el Banco Central queda sujeto a lo que la Constitución prescribe. Eso está establecido en el artículo 3º, y creemos que se trata del aspecto fundamental en cuanto a innovación en la Carta Orgánica.

Dicho artículo establece que la misión primaria y fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda, sujeto exclusivamente a la legislación que dicte el Congreso y sin sujeción a órdenes, indicaciones o instrucciones de ningún órgano que no sea éste.

El ordenamiento monetario constitucional está contemplado en los artículos 67 —incisos 5º y 10— y 108 de la Carta Magna. De acuerdo con ese inciso 10 corresponde al Congreso hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. En el inciso 5º se determina la facultad del Congreso de establecer y reglamentar un banco nacional en la Capital y sus sucursales en las provincias, con la facultad de emitir billetes. Y de acuerdo con el artículo 108, las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación; no pueden acuñar moneda ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal.

Estos preceptos constitucionales encuentran su razón en el hecho de que al momento de la sanción de la Constitución existía una verdadera anarquía, un caos monetario en el país.

Siguiendo las palabras pronunciadas por el académico doctor Buscaglia en la conferencia brindada en el '90 en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, podemos decir que en el siglo XIX, en todo el territorio de la Confedera-

ción Argentina, circulaban distintos tipos de monedas, muchas de ellas extranjeras, como soberanos ingleses, napoleones franceses, doblones españoles, cóndores chilenos y águilas de los Estados Unidos. En menor escala, en las provincias del Norte se utilizaba moneda de plata de buena ley, como los patacones, que era moneda de plata española. Había también soles peruanos y pesos fuertes de Chile y de Bolivia. Además, había papel moneda fiduciario —es decir, que no tenía convertibilidad— emitido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que lo hacía con cierta prudencia y regularmente. Asimismo, regulaba la paridad, por ejemplo, por los pagos que la provincia recibía por los derechos de aduana en lugar de recibir metálico.

En el interior de la provincia de Buenos Aires circulaban este papel moneda y algunos pesos de oro y plata. En las del Litoral circulaba moneda fiduciaria emitida por los bancos de esa zona y moneda de los países vecinos. Generalmente las monedas de plata extranjera provenían del comercio que existía con los países vecinos.

Esta situación anárquica y de caos fue recordada por Domingo Faustino Sarmiento cuando era diputado nacional. Durante el debate en 1879 de la que sería después la ley monetaria 974, expresaba Sarmiento que los fundadores de la Constitución de 1853 y los que la reformaron en 1860 tuvieron en cuenta esta situación —se refería al caos y anarquía monetaria— al otorgar al Congreso la facultad de acuñar moneda y uniformarla como una conveniencia nacional a fin de completar la organización y la unidad de la Nación. Agregaba Sarmiento que una moneda nacional era el único remedio para unificar a la Nación.

Juan Bautista Alberdi proponía en su proyecto que fuera la Confederación, a través del Congreso, la que tuviera la atribución de hacer sellar moneda y fijar su peso, ley, valor y título. Las provincias, por su parte, no podrían ejercer el poder que delegaban en la Nación.

No obstante, advertimos que en el texto constitucional se crea un banco nacional para emitir moneda.

Esta diferencia entre el proyecto de Alberdi y el texto constitucional se debe según algunos a una omisión, porque facultaba al Congreso para hacer lo más. Así, quien tiene facultades para hacer lo más también puede hacer lo menos, o sea, emitir billetes y hacer sellar monedas.

La creación del banco emisor fue un aporte del convencional constituyente Mariano Fraguero, representante de la provincia de Cór-

doba, quien por su concepción socialista plantea en ese momento la necesidad de que la moneda sea un instrumento en poder del Estado. Por esa razón propone que se incorpore al texto constitucional la creación de un banco nacional con facultad de emitir moneda. De allí que nuestra Constitución se aparta en ese aspecto del proyecto original de Juan Bautista Alberdi.

La reforma constitucional de 1860 no agrega nada a la materia monetaria.

Para analizar los conceptos a los que alude la Constitución en materia monetaria debemos tener en cuenta que cuando habla de moneda no se refiere solamente a los metales amonedados sino también a los papeles que en ese momento circulaban como billetes de banco. O sea que el concepto de moneda debe ser entendido aquí en sentido amplio.

Con respecto al verbo sellar, que en nuestro idioma significa estampar, imprimir, también debe ser entendido en sentido amplio, en tanto comprende al metal y al papel.

El inciso 5° del artículo 67 de la Constitución dispone que es atribución del Congreso establecer y reglamentar un banco nacional con facultad de emitir billetes. Esta norma se refiere no sólo a la impresión de papel moneda con valor fiduciario o convertible en metal sino también a la impresión y puesta en circulación de títulos valores, efectos públicos, etcétera. Por supuesto, esto implica también la facultad de producir moneda metálica.

Cuando la Constitución asigna al Congreso la atribución de establecer y reglamentar un banco nacional con facultad de emitir billetes, en primer lugar subordina este banco a su autoridad, y en segundo término dispone que el Congreso puede autorizar a este banco de emisión a imprimir en el papel un sello o cuño de la autoridad soberana del Estado a fin de que dicho papel tenga el carácter de moneda nacional. Cualquier otra interpretación no sería concordante con la norma principal del inciso 10 del artículo 67 —hacer sellar moneda—, puesto que ella forma parte de las atribuciones legislativas que a nuestro juicio son irrenunciables, imprescriptibles e indelegables.

La subordinación institucional y operativa del banco de emisión a la autoridad del Congreso se desprende del propio texto del inciso 5°.

¿Qué otro significado tiene el verbo “establecer” que no sea el de crear este banco de emisión por ley, otorgándole personería jurídica, confiriéndole su estatuto a través de una carta orgánica y designando sus autoridades? Lo habi-

tual cuando se trata de otras instituciones es que esa personería y ese estatuto sean otorgados por el Poder Ejecutivo. De allí que viene acertada la locución “reglamentar”: ordenar todas y cada una de las actividades de un banco según ciertas normas operativas, que tratándose de un banco de emisión pueden afectar la credibilidad y la confianza pública en la moneda nacional.

Una interpretación equívoca del inciso 5° del artículo 67 se sustenta en que el banco de emisión, según esa norma, tiene la facultad de emitir billetes por delegación del Poder Legislativo.

Ya se explicó que el verbo “emitir” sólo significa producir industrialmente y poner en circulación el papel moneda. En este contexto la facultad de hacerlo equivale a la autorización que le confiere el Congreso para desempeñar ese cometido industrial, conforme los mandatos legislativos. De ninguna manera significa que el banco de emisión puede decidir por sí acerca de la calidad y cantidad de la moneda a poner en circulación y que esté capacitado para manipular su valor, su poder adquisitivo; no le está permitido. Por lo tanto, no existe delegación legislativa ni constitucional de ningún tipo.

De allí que esta concepción equivocada de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo ha traído muchísimos y graves perjuicios al país, desajustes sectoriales de la economía argentina al sucederse diversos, múltiples y continuos períodos de emisión descontrolada de parte del Estado con déficit públicos que fueron financiados irrestrictamente con moneda espuria creada por la sola emisión.

Esto también alteró los patrones de valor, la tasa de interés, el tipo de cambio, y además considero que fue causa entre otras de la pérdida del valor de la moneda y del decaimiento económico y social padecido por el país.

Una reafirmación de la facultad del Congreso en la materia la constituye la ley 23.928, de convertibilidad. Al fijar una equivalencia de diez mil australes por dólar lo que se hizo fue fijar también el valor de la moneda nacional respecto de la extranjera, según prescribe el artículo 1°.

El artículo 4° dispone que “en todo momento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras serán equivalentes a por lo menos, el ciento por ciento de la base monetaria”; el Congreso fija la política de emisión monetaria.

La ley de convertibilidad es así un claro ejemplo de cómo funciona el Congreso en

cuanto a sus facultades en política monetaria, tanto en lo que hace a la fijación del valor de la moneda propia con relación a la extranjera, cuanto al volumen de emisión de la moneda nacional.

Existen antecedentes en la legislación sobre el Banco Central a través de los cuales llegamos a este debate parlamentario sobre su carta orgánica.

Es la segunda vez que el Congreso tiene oportunidad de debatir sobre la carta orgánica del Banco Central ya que anteriormente este instrumento fue establecido por decreto.

En 1935 el Congreso de la Nación creó por ley 12.155 el Banco Central de la República Argentina. Al momento de debatirse esta ley, recién hacía veinte años que se comenzaba a hablar de "bancos centrales". Anteriormente se hacía referencia, más bien, a "bancos de emisión", a veces más de uno por país, que en la práctica consistían en distintas modalidades de "cajas de conversión". De hecho, el Banco Central de la República Argentina se formó sobre la base de la preexistente Caja de Conversión.

El nuevo concepto de banco central introduce una innovación sobre las cajas de conversión: la incorporación del control monetario, es decir, el control de la política monetaria. Esta innovación significaba en la práctica añadir funciones y potestades propias de la política bancaria a la misión básica y primordial de preservar el valor de la moneda.

La preservación del valor de la moneda era el sustrato de la ley 3.871, de conversión, que el Congreso aprobó el 4 de noviembre de 1899. Esta ley de conversión tuvo plena vigencia hasta el 2 de agosto de 1914, momento en que debió interrumpirse por las consecuencias que originó el comienzo de la Primera Guerra Mundial.

La clausura de la Caja de Conversión se mantuvo hasta 1927, restableciéndose sus operaciones en diciembre de 1929, debido nuevamente a factores externos, en este caso la gran depresión de la bolsa de Nueva York en octubre de ese año.

La introducción de las políticas de redescuento de créditos durante el período 1930/1935 —esto es, la emisión de dinero contra créditos contingentes y no contra activos ciertos— hacían inviable la vuelta a un sistema como la Caja de Conversión. El sistema de convertibilidad permitía una muy clara distinción entre dos conceptos: dinero y crédito.

El dinero, como todos sabemos hoy en día, es la manifestación de un valor con poder definitivo

de cancelación de deudas. El crédito es un valor precario sujeto a contingencias de toda especie. Quienes participaron de la discusión parlamentaria de 1935 tenían conceptualmente muy clara la diferencia entre el crédito y el dinero, diferencia que al no estar bien establecida al dictarse la carta orgánica del Banco Central, condujo al debilitamiento de sus funciones básicas, en especial la de preservar el valor de la moneda. Veían con claridad que la creación de dinero no implica creación de crédito, que la emisión de dinero en forma subrepticia, con lo cual el Estado se apropia de recursos de los ciudadanos, envilece el valor del dinero que éstos poseen.

Este punto también fue visto por los constituyentes, que junto con la facultad de crear impuestos le dieron al Congreso la de fijar el valor de la moneda. El riesgo que los parlamentarios de aquella época veían con claridad era el de crear lo que hoy llamamos "impuesto inflacionario", es decir, de generar solapadamente la base de inflación futuras.

Muchos legisladores, algunos notablemente de extracción socialista, manifestaron profundas reservas sobre el proyecto de creación del Banco Central, cuya defensa quedó a cargo de la bancada oficialista de ese momento. Estos legisladores —entre los que podemos recordar a Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios y Nicolás Repetto— veían con claridad la confusión entre estos conceptos y expresaron con dramatismo el riesgo de repetir en nuestro país la hiperinflación que Alemania había sufrido en 1923.

La confusión de dinero y crédito introducía la posibilidad de políticas inflacionarias, que según decían aquellos socialistas, afectarían inexorablemente el ingreso de los más desposeídos. Defendiendo la idea de que era necesario mantener una moneda sana, el diputado Enrique Dickmann, uno de los representantes socialistas de la época, manifestaba sin reparos: "Estamos, señores diputados, en presencia del triunfo del emisionismo en la Argentina". Estas palabras, dichas en 1935, serían actuales a lo largo de las últimas décadas.

En concordancia con aquellas predicciones, y teniendo ahora a la vista lo que sucedió, cabe recordar también las palabras del actual presidente del Banco Central, doctor Roque Fernández, quien en un trabajo publicado hace más de un año señaló que en la década pasada el país perdió aproximadamente 67.500 millones de dólares; otros llegaron a hablar de 100.000 millones perdidos como consecuencia de la emisión descontrolada.

La claridad con que los legisladores de ese momento insistían en la diferencia entre dinero y crédito seguramente no era independiente de los otros proyectos que se discutían dentro del paquete considerado en ese momento. Aparecían en este paquete la creación del Instituto Movilizador de Activos y la Ley de Bancos para sanear la difícil situación de las carteras de los bancos oficiales. Se trataba de una situación muy similar a la que hemos vivido en las últimas décadas.

Estas reflexiones históricas tienen el valor de hacernos aprender del pasado y evitar la reiteración de ciertas situaciones, a los efectos de crear los instrumentos idóneos para impedir la vuelta de estos males en el país.

Tenemos que decir que los recursos que en 1935 se usaron para atender los requerimientos derivados de ese paquete legislativo y la crisis no significaron entrar en una revaluación de las tenencias de oro, lo que en otras palabras significa una devaluación de nuestra moneda en ese momento; o sea que los que financiaron el nacimiento de esas instituciones tuvieron que apelar al impuesto inflacionario.

Luego el decreto ley 8.504/46 convalidó lo que significó la nacionalización de la banca central, pero no alteró los otros objetivos que tenía el Banco Central. Por lo tanto, no se puso límite a la facultad de emitir. Aun con las modificaciones introducidas en septiembre de 1949, el ministro de Finanzas y el subsecretario de dicha cartera son presidente y vicepresidente natos de la entidad, a la que aunque se mantiene como autárquica se la hacía depender de una forma directa del Ministerio de Economía.

El decreto 14.570/56 independizó relativamente a las autoridades del Banco Central del Poder Ejecutivo. El decreto 13.130/57 ratificó que el Banco Central era una entidad autárquica de la Nación, manteniendo la independencia relativa de la conducción del Banco Central en relación al Poder Ejecutivo. Con este decreto ley nuevamente cobró vigencia el acuerdo del Senado para presidente y vice, incorporándose en ese momento el requisito del acuerdo para el síndico de la institución.

Debemos analizar por qué ha sucedido todo esto. Además de que las leyes lo permitían era, como lo dijo el premio Nobel de Economía James Buchanan, en la teoría de la elección pública, en la Universidad de Virginia, porque el sistema de incentivos existente en el poder político conduce inevitablemente a un exceso de gasto público y a un crecimiento del sector es-

tatal, que termina siendo superior al deseado por la ciudadanía.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

**Sr. Romero.** — La autoridad política, al tener un horizonte limitado, obviamente por los plazos constitucionales —y esto es lo deseado— prevé soluciones para ese mandato que a veces traen consecuencias en el siguiente. Esto como teoría indica que la continuidad democrática tan deseada por todos ha inducido en muchos países a excesos en el gasto, aunque en Argentina tenemos que decir que el exceso no sólo fue privativo de gobiernos democráticos sino que, por el contrario, en los de facto fue donde hubo mayor descontrol.

Pero sí tenemos que decir que las sucesivas secuencias de los distintos gobiernos han ido produciendo una acumulación de nuevos gastos que trajo como consecuencia la necesidad de la financiación de los mismos a través de la emisión.

Aquí se trata de separar esas dos relaciones. Es decir, separar los plazos políticos y las necesidades coyunturales de la estabilidad que debe tener un ordenamiento monetario y también la continuidad que los países modernos están realizando. Tal es el caso de Alemania o recientemente de Chile, que dan una estabilidad más permanente y una independencia mucho más importante al Banco Central.

Obviamente el exceso del gasto público trae como consecuencia inmediata la problemática inflacionaria. Si los que deciden el gasto a su vez controlan el Banco Central tenemos ya el resultado que todos conocemos: la financiación espuria del déficit presupuestario, la financiación sin respaldo del gasto público. Entonces, el problema inflacionario que emerge del descontrol del gasto y de su financiamiento por vía de la emisión son inevitables consecuencias inflacionarias. Se le agrega además la desestabilización que supone la alternancia de políticas económicas a veces disímiles entre sí. Cuando la alternancia de partidos en el control político con distintas concepciones económicas se produce en el medio de cambios, surge una situación de incertidumbre que aumenta o disminuye la credibilidad de los que consideramos que el Banco Central y la política monetaria no tienen que estar sujetos a los sucesivos y necesarios cambios de autoridades. De allí que proponemos una estabilidad mucho más permanente.

Como dijimos, la mayoría de los países ha optado por darle al Banco Central la función de preservación del valor de la moneda, restringiendo la facultad de financiación de los gastos del Estado.

De esta forma ingresamos en la temática central de este proyecto de ley, que es la independencia del Banco Central de la República Argentina. Dicha independencia está referida básicamente al tema de la política económica coyuntural general a fin de preservar el valor de la moneda.

También se refiere a la independencia, por cuanto ésta releva de la obligación de financiar automáticamente al gobierno, y finalmente a la independencia relacionada con su propia organización y administración interna.

El artículo 3º del proyecto no sólo fija la preservación del valor de la moneda como misión primaria y fundamental sino que limita el accionar del banco sometiéndolo solamente a la legislación que dicte el Congreso. Asimismo, la institución se encuentra libre de cualquier tipo de intromisión proveniente de cualquier otro ámbito de los poderes públicos.

El Banco Central no podrá asumir obligaciones que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Congreso de la Nación el ejercicio de sus facultades legales.

Como lo señalamos antes, la función básica y primordial del Banco Central es preservar el valor de la moneda; por ello, resulta obvio que la única dependencia que puede tener es del Congreso, pues a dicho poder la Constitución Nacional le atribuye la facultad de fijar el valor de la moneda.

El cumplimiento de estas disposiciones se encuentra previsto en el artículo 7º del proyecto, que dispone que la designación por parte del Poder Ejecutivo nacional del presidente, vicepresidente y miembros del directorio deberá ser hecha con acuerdo del Senado de la Nación.

En este sentido, vale la pena recordar no sólo los antecedentes históricos y jurídicos legales a los que hicimos referencia sino también el caso de Chile, cuya Constitución establece la estabilidad y la forma de designación de sus miembros; se trata de un caso extremo más pues convierte al Banco Central en un cuarto poder, lo que no es nuestra intención; nosotros no estamos emulando este ejemplo.

En consecuencia, no le damos ningún status constitucional al Banco Central porque con este proyecto no reformamos la Constitución sino que cumplimos con lo que ella establece: la suje-

ción de la política de emisión de moneda al Congreso de la Nación y que el Banco Central cumpla su misión primordial de preservar su valor.

Con respecto a la forma de elección de las autoridades, es sabido que la Constitución Nacional establece el acuerdo del Senado como formalidad o requisito para la designación de ciertos funcionarios del Estado. Así, el inciso 5) del artículo 86 de nuestra Carta Magna dice que el presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del Senado; el inciso 10), que nombra y remueve a los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, con acuerdo del Senado; el inciso 16) que provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores del Ejército y Armada; y el presidente por sí solo, en el campo de batalla.

Este es el texto constitucional.

Existieron numerosas leyes en distintos momentos que requirieron diferente tipo de acuerdo para cubrir cargos en entidades autárquicas. Pero esta disposición fue derogada en 1974 por la ley 20.677 que suprimió el requisito del acuerdo del Senado para la designación de funcionarios en todos aquellos organismos de la administración pública, cualquiera fuera su naturaleza, que no estuvieran reglados por la Constitución Nacional. Es decir, que se limitó nuevamente la necesidad de los acuerdos únicamente a los casos previstos por la Constitución, para no entrar en contradicción con el inciso 10) del artículo 86 que establece que el presidente de la República por sí solo podrá nombrar y remover los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y demás empleados de la administración, cuyo nombramiento no esté reglado por la Ley Suprema.

Si bien esto es así, la pregunta es por qué en este caso estamos determinando la creación del acuerdo del Senado.

La respuesta es que durante el trabajo elaborado en el despacho hemos analizado profundamente este tema y consideramos que con la creación de este acuerdo, a pesar de no estar establecido en la Constitución, no vamos a ir en contra de la misma porque, si bien no es exigible jurídicamente como requisito de eficacia del nombramiento, puede ser establecido como un uso o costumbre constitucional, como una práctica a partir de la cual puede nacer una costumbre constitucional.

Obviamente no es éste el momento para analizar el rol de la costumbre dentro del derecho, pero esto hace a la convivencia jurídica de la comunidad y a la convicción de que esto es necesario y de que en cierta medida su obligatoriedad es importante.

En los casos en que el proyecto se refiere al acuerdo del Senado, nos estamos colocando en el terreno de las normalidades, es decir de aquellas normas que se hacen con el uso obligatorias en la conciencia de los ciudadanos.

Si una persona es designada director del Banco Central en contra de este acuerdo o sin el acuerdo del Senado, su designación será eficaz, pero sin embargo pesará sobre ella la señal de no haber merecido la confianza del Senado de la Nación. Y para cualquier persona que aspire al calificativo de ciudadano digno esa desconfianza institucional puede ser insoportable. En cambio, el procedimiento que proponemos es un camino que otorga seguridad en la designación tanto a los gobiernos como a los funcionarios que han de desempeñar el cargo.

Similares referencias merece el mecanismo adoptado para la remoción de los directores.

No podemos tampoco ir en contra de la norma constitucional que ya mencionamos, por la cual es el presidente quien nombra y remueve. Pero establecemos un mecanismo mediante el cual no estamos dando una estabilidad o inamovilidad que la Constitución prevé en algunos casos. Lo que estamos expresando es que el Congreso, a través de las comisiones de ambas Cámaras, dará un consejo respecto de la voluntad de remoción de un director, siempre fundada en la justa causa por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

El Senado actúa en la remoción de los funcionarios sujetos a juicio político, que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Nacional son el presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces.

Con ello se quiere decir que obviamente los directores del Banco Central no podrían estar sujetos a juicio político.

No estamos diciendo eso, sino que estamos interpretando una forma de remoción que es similar a la existente para el caso de los embajadores y ministros plenipotenciarios, que pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo pero que para ser nombrados han necesitado el acuerdo previo.

Estamos creando para el Banco Central un mecanismo similar por el cual el Poder Ejecutivo puede dejar sin efecto el nombramiento

luego de un dictamen o despacho de las comisiones específicas de ambas Cámaras, teniendo en consideración la justa causa por la cual este hecho debe producirse.

El artículo 8º, indica que no podrán ser miembros del directorio del banco aquellas personas que, directa o indirectamente, dependan de otros organismos públicos o que puedan tener vinculaciones con otras entidades, de modo tal que sobrevengan conflictos de intereses que puedan condicionar la libertad de criterio de los directores de la institución.

El artículo 9º fija un procedimiento de remoción para los directores del banco, que es el que acabamos de exponer, a través de los dictámenes de las comisiones.

El artículo 10 obliga al presidente del Banco Central a presentar un informe —al menos una vez por año— sobre la política seguida por la institución ante las comisiones de cada una de las Cámaras.

Entendemos que no puede haber independencia de los funcionarios del Banco Central sin un adecuado control. Los artículos 36 y 39 se encargan de reforzar la Sindicatura del Banco Central, incorporando un síndico titular y otro adjunto, que también deben contar con acuerdo del Senado, y hablan del requisito de una auditoría externa y rotativa para los balances del Banco Central de la República Argentina.

No obstante también están sujetos en este caso al Tribunal de Cuentas o al organismo que lo reemplace.

Puede quedar la duda de cómo se articula esta independencia con el resto de la política económica que pueda encarar un determinado gobierno. El proyecto prevé una adecuada coordinación con la política económica general. Para ello el artículo 7º fija la duración del mandato de los miembros del directorio por un plazo de seis años, de modo tal que sus mandatos se superponen de hecho con los períodos del Poder Ejecutivo nacional. Y el mismo artículo 7º prevé, junto con el 58, que la mitad de los miembros del directorio se renueven cada tres años. De esta manera se contempla la necesidad de preservar una razonable continuidad en la política económica, sin producir cambios violentos o traumáticos con consecuencias no deseadas sobre la estabilidad de la moneda, el sistema financiero y la credibilidad de los ciudadanos.

Nuevamente resulta ilustrativo referirnos a ejemplos recientes de otros países. Tenemos el caso de Chile, en donde la estabilidad que la Constitución le ha dado al Banco Central y a sus

autoridades no ocasionó traumas en la credibilidad de los ciudadanos respecto de su moneda ante el cambio de autoridades de un régimen totalitario a un sistema democrático.

**Sr. Lafferrière.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Romero.** — Sí, señor senador.

**Sr. Lafferrière.** — Solamente deseo efectuar una consulta.

Dentro de la autonomía que se le otorga al Banco Central se le da también la capacidad de elaborar su propio presupuesto de gastos y recursos. Mi inquietud se refiere a si existe algún tipo de fiscalización republicana por medio de otro órgano que trascienda al propio directorio del Banco Central, habida cuenta de que se incluye entre otras cosas la facultad de establecer las remuneraciones del propio directorio y del personal del banco.

Pienso que si así no fuera estaríamos creando una especie de organismo independiente del sistema de la administración central, que podría traer consecuencias graves, como ha sucedido y hemos podido ver en los últimos meses con el Poder Judicial.

**Sr. Romero.** — Es muy importante la pregunta del señor senador porque me permite aclarar una inquietud que es de todos respecto al riesgo del descontrol del gasto.

Como dije hace algunos momentos, no estamos frente a la creación de un cuarto poder ni nada parecido. El presupuesto de gastos del Banco Central obviamente integra el presupuesto de gastos de la administración nacional y es parte del Presupuesto General de la Nación. Por lo tanto, el control máximo que va a existir va a ser el de este Congreso, que se va a ocupar de revisar el gasto.

Por otro lado, no nos olvidemos de que en el caso del Poder Judicial nosotros le hemos otorgado por ley una autarquía financiera y le hemos permitido la fijación de todas sus remuneraciones entendiendo que se trata de uno de los poderes del Estado.

En esta ocasión nos encontramos con una escala mucho menor, y obviamente no estamos haciendo nada más que dar el status de descentralización, donde se tiene en cuenta un presupuesto que es parte del Presupuesto General que el Congreso debe tratar.

No obstante ello, existe la obligación de una auditoría externa, hay síndicos que controlan, y además está el control del Tribunal de Cuentas o del organismo que pueda reemplazarlo. Es decir que el riesgo queda totalmente minimizado.

Tenemos que darnos cuenta de que de nada serviría un Banco Central autónomo si no hubiera un ordenamiento de la economía en general para que tengamos una moneda estable y que los presupuestos reflejen valores reales, ciertos, los que además deben ser aprobados en término.

Deseamos que esto de aquí en más suceda. Es decir que por medio del presupuesto anual anterior podremos saber lo que en un determinado año va a gastar el Banco Central en remuneraciones.

**Sr. Lafferrière.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Romero.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Lafferrière.** — En consecuencia, debe entenderse que cuando en el proyecto se dice que el Banco Central o su directorio elabora el presupuesto, en realidad lo que hace es confeccionar el proyecto de presupuesto del banco que luego debe tratarse por el Congreso Nacional junto con el Presupuesto General de la Nación.

**Sr. Romero.** — Para expresarme bien, reitero que el presupuesto del Banco Central es parte del Presupuesto General de la Nación, que obviamente debe ser tratado por el Parlamento.

**Sr. Lafferrière.** — Muchas gracias, señor senador.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Gracias, señor presidente.

También es necesario recordar la importancia de la estabilidad monetaria para evitar los riesgos de la pérdida de confianza ante la sensibilidad del mercado. En el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el directorio tiene un mandato de catorce años con acuerdo del Senado; su renovación es parcial y escalonada. La duración del mandato del presidente de la Reserva Federal es de siete años y en la práctica hemos visto que en los últimos tiempos las administraciones van confirmando a los funcionarios designados por los gobiernos anteriores de ese país. Por lo que uno se entera a la distancia, una de las principales acciones que debe desempeñar la Reserva Federal es proteger el valor de la moneda de su país.

Consideraciones similares caben con respecto a la legislación alemana en cuanto al funcionamiento del Bundesbank, cuyas autoridades y miembros del directorio tienen estabilidad y continuidad.



En nuestro caso hemos previsto un mandato más limitado que el de los Estados Unidos; es de seis años, con renovación escalonada en dos partes, una cada tres años.

Para referirme concretamente a la coordinación que debe existir entre la política monetaria y su ejecución, el artículo 12 prevé la participación natural en las reuniones del directorio del Banco del ministro de Economía o su representante, quien tendrá voz pero no voto al no ser miembro del cuerpo. Es importante que el ministro de Economía pueda actuar en voto en las reuniones del directorio.

Otro de los aspectos importantes a mencionar es la independencia en cuanto a la obligación de financiar automáticamente al gobierno. Creemos que este mecanismo fue uno de los males que le han sucedido al país; me refiero al financiamiento descontrolado del Tesoro nacional. Muchos artículos de este proyecto de ley protegen esa limitación. No nos olvidemos de que en 1935 los legisladores también veían como uno de los males la financiación descontrolada a la que hago referencia.

El artículo 19 del proyecto prohíbe expresamente conceder préstamos directos al gobierno nacional, a los bancos oficiales, provinciales o municipales. El mismo alcance tiene la prohibición de extender garantías o avales a favor de tales entidades.

El artículo 33 restringe el crédito total que el Banco Central puede extender a favor del gobierno nacional, fijando un máximo del 33 por ciento para la tenencia de títulos públicos que pueden ser mantenidos como "prenda común", a los que se refiere la ley 23.925 de convertibilidad.

El artículo 20 señala que el Banco Central sólo podrá financiar al gobierno a través de la compra a precios de mercado de títulos públicos que sean negociables. Asimismo, este artículo fija un límite del 10 por ciento al crecimiento anual que pueden experimentar las tenencias de títulos públicos en poder del Banco Central, restringiendo el monto de financiamiento que anualmente pueda extender la institución a favor del gobierno.

El artículo 60 interrumpe el financiamiento que el Banco Central podría extender a favor del gobierno, producto de los eventuales beneficios originados por las operaciones de cambio del Banco.

Otra consideración aparte merece la prohibición de integrar encajes con otra cosa que sea dinero, contenida en el artículo 28. Se evita de este modo la extensión de un financiamiento so-

lapado al gobierno nacional que existiría si se permitiera integrar los encajes de los bancos con títulos públicos.

Dicho sea de paso, a fin de preservar el control sobre la cantidad de dinero, cumpliendo con el objetivo primordial de preservar el valor de la moneda y mantenerse dentro de los lineamientos de la ley de convertibilidad, se prohíbe que los encajes sean remunerados.

Sobre este punto debemos recordar la costosa experiencia que en materia de pérdidas se originó en el pasado a través de la famosa "Cuenta de Regulación Monetaria", la que queda derogada por el artículo 60. Esta prohibición de remunerar encajes también se encuentra presente en numerosos países, como ocurre con el Bundesbank de Alemania.

Analizaremos ahora la independencia administrativa del Banco Central, que es el tercero de los aspectos a los que se alude con relación a la independencia. Esto está vinculado a su administración y organización interna.

A través del artículo 15 se faculta al directorio a tomar todas las medidas de potestad administrativa que se requieran para el buen funcionamiento de la institución, permitiéndole incluso aprobar su propio presupuesto de funcionamiento, que incluye las remuneraciones que perciben los miembros del directorio. Y está claro lo que dije hace un momento de que este presupuesto formará parte del presupuesto nacional que el Congreso debe aprobar con anticipación.

El artículo 16 permite la remoción de los máximos miembros de conducción de la institución, lo que periódicamente se denomina la línea del banco, de manera tal de preservar su independencia incluso en la ejecución de las políticas y evitando que de la implementación de las mismas puedan surgir elementos que distorsionen los objetivos fijados. O sea, que es facultad del directorio la remoción de sus empleados o funcionarios.

En cuanto a otras funciones que debe cumplir el Banco Central, ellas se desarrollarán siempre que estén subordinadas a la preservación del valor de la moneda.

Los incisos *a)* y *b)* del artículo 4º facultan al Banco Central a dotar de adecuada iliquidez al sistema. Pero esta iliquidez tiene un límite ya que se establece que el Banco Central será un prestamista del sistema financiero de última instancia. El inciso *c)* de este mismo artículo habla de propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales. Implícitamente se dis-

tingue entre el concepto de dinero, elemento que se encuentra en la órbita del Banco Central y el concepto de crédito, que se encuentra en la órbita del mercado de capitales.

Aquí se recoge la experiencia internacional de los últimos años en la materia en cuanto a que el financiamiento de la actividad productiva se realiza cada vez más por la vía de la emisión de deudas de las empresas, que es causa de las obligaciones negociables, que aprobamos nosotros, o de la emisión de acciones, que por los créditos bancarios típicos. Se ve disminuida progresivamente la influencia del préstamo directo dado que los bancos hacen canalizar masas de dinero de los tenedores hacia quienes lo necesitan. Esto va quitando riesgos al mercado de préstamos, que no asumen los bancos, sino que son transferidos a los tenedores de fondos que también participan de las ganancias, en el caso de las obligaciones negociables. Todo esto va estructurando un sistema financiero con más solidez y estabilidad.

En consecuencia, también es deseable que esta estabilidad y seguridad haga crecer paulatinamente el mercado de capital junto con la disminución progresiva del financiamiento directo de las entidades financieras, y en menor medida del Banco Central. Así se evitan los famosos efectos dominó o cascada, por los cuales el riesgo de iliquidez de un banco puede ocasionar un colapso en el sistema en general. Ante una crisis de solvencia no es tan marcado el riesgo que existe porque el Banco Central sólo asistirá en caso de iliquidez transitoria.

La Carta Orgánica establece operaciones permitidas y prohibidas para el Banco Central. Obviamente, sin estabilidad en el valor de la moneda, el sistema financiero presenta obvias y notorias ventajas competitivas respecto de otros países del mundo. Existen dos condiciones fundamentales para que un sistema financiero se desenvuelva sin sobresaltos. Una de ellas es que exista demanda para sus depósitos, y otra es que existan prestamistas que asumen el riesgo del descalce de plazos del sistema financiero.

La experiencia hiperinflacionaria que aparece en nuestro país muestra claramente que la demanda de australes depende de la tasa de inflación que el público percibe que va a existir. Así, hemos visto cómo los ciudadanos huyen de nuestra moneda cuando perciben un riesgo hiperinflacionario. En esas condiciones los depósitos llegan a desaparecer.

En este momento puede exhibirse un monto elevado de depósitos no sólo en moneda nacional sino también en moneda extranjera.

Los dos comportamientos explicados recién —de huida de nuestra moneda y de elevado porcentaje de depósitos— evidencian la diferente actitud del público de acuerdo con las distintas contingencias que se perciben respecto de la moneda, ya sean ellas favorables o desfavorables. Precisamente dichas contingencias preocupan al ahorrista más que la situación de liquidez o iliquidez de un banco. El ahorro fluye más dependiendo del riesgo general de la economía que de la situación de los bancos en particular.

Para preservar el valor de la moneda y actuar como prestamista de última instancia, el Banco Central conserva las atribuciones básicas que se le asigna a todo Banco Central. En este sentido, preservar el valor de la moneda es la función primordial del Banco Central.

En el proyecto de ley en consideración se ha puesto especial cuidado en garantizar aquel objetivo primordial —preservar el valor de la moneda— y el de ser prestamista de última instancia.

La función de ser prestamista de última instancia tiene su razón de ser en brindar una mayor protección a las entidades que operan en moneda local. El principal beneficiario de esta función de prestamista de última instancia es el sistema bancario privado y nacional. De allí que para evitar el pánico o la corrida, se permite que el Banco Central pueda en última instancia otorgar asistencia crediticia transitoria a las entidades financieras con problemas de iliquidez.

Con respecto a una hipotética corrida de la moneda local, la ley de convertibilidad exige una permanente disponibilidad de reservas en el Banco Central, de modo tal que se puedan atender los cambios que pudieran aparecer por la súbita recomposición de la relación moneda local-moneda extranjera que los ciudadanos desean.

Para evitar las corridas que pudieran producirse por pérdida de confianza en la moneda local debido a la situación particular de algunas entidades financieras, existe una solución automática que no requiere la intervención del Banco Central. Me refiero al préstamo entre las mismas entidades.

A fin de resolver problemas de iliquidez y no de solvencia, el proyecto prevé varios instrumentos. Uno de ellos es el que permite al Banco Central comprar divisas o títulos públicos a las entidades con problemas o sin ellos, incluso mediante pases que aseguran a las entidades la cotización futura de esos papeles.

El Banco Central, asimismo, puede proveer liquidez sin restricciones modificando los efectivos mínimos.

Los problemas de detección de entidades insolventes son comunes a todos los regímenes. Aun en los países más desarrollados en la materia se producen caídas de entidades que no son previstas por los entes de supervisión.

Por este motivo se restringen las operaciones que puede realizar el Banco Central, de modo tal de no violentar el objetivo primario de preservar el valor de la moneda.

El hecho de permitir operaciones de corto plazo a fin de proveer una adecuada liquidez al sistema financiero está condicionado al requisito de que esta liquidez se concrete contra la entrega de activos. Así se preserva el patrimonio del banco y se evitan las contingencias del financiamiento a entidades insolventes.

No olvidemos la inmensas pérdidas que el Banco Central debió soportar en los últimos años por haber salido a asistir a bancos que fueron manejados de una manera irresponsable. Dichas pérdidas tuvieron que ser soportadas por toda la comunidad.

Otro aspecto que atañe a la liquidez del sistema financiero se vincula con la prohibición de los descubiertos a las entidades por el Banco Central de la República Argentina. Estos descubiertos no son más que una de las deformaciones en las que se ha incurrido localmente y que en la práctica han significado el otorgamiento de un crédito automático y sin garantía, que las mismas entidades se tomaban en contra del Banco Central, sin ninguna autorización. Esa era una forma que tenían estas entidades para girar en descubierto contra el Banco Central y crear moneda. Por lo tanto, en algún momento el Estado dejó de tener control sobre la emisión de moneda.

La eliminación de la garantía de los depósitos, incorporada por el inciso k) del artículo 19, merece una consideración especial. La ley 12.156, que fue la primera norma relativa al Banco Central discutida y aprobada por el Congreso de la Nación en 1935, no preveía ningún sistema de garantía de depósitos pero sí, ante la liquidación de un banco, los depósitos inferiores a \$ 5.000 tenían derecho o privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles luego de las otras categorías de créditos privilegiados enumerados por los códigos Civil y de Comercio y por la ley de quiebras.

La reciente experiencia de la década pasada nos indica que este régimen de garantía de depósitos, que se encontraba plenamente justifi-

cado cuando los depósitos estaban nacionalizados, al mantenerse en la situación en que los depósitos no poseían un encaje del ciento por ciento —al eliminarse la racionalización de los depósitos se ha mantenido un instrumento compatible con ésta: la garantía—, ha provocado enormes y significativas pérdidas que debieron ser afrontadas por toda la comunidad. Se llegó así al absurdo de lo que algunos economistas denominaron “sistema de socialización de pérdidas con apropiación privada de ganancias”.

También indica la experiencia que no han sido eficientes las limitaciones prácticas impuestas para restringir el volumen de las pérdidas que la comunidad debía asumir por la garantía de los depósitos, ya que es sabido que imponiendo montos determinados, por subdivisión en distintos tenedores siendo uno solo el tenedor, se llegaban a garantizar montos superiores a los originalmente deseados.

Esto lo sabemos y lo vemos en distintos diarios: hay muchísimas entidades que ya están renunciando y otras que ya lo hicieron aunque nunca estuvieron en el régimen de garantías de depósitos.

La confianza que cada entidad merece a través del control que debe hacer la Superintendencia de Bancos y la estabilidad en el sistema van a dar una garantía a los ahorristas, como en el caso actual en que —repito— los depósitos en dólares casi alcanzan a los depósitos en australes, que en los últimos años no tuvieron garantía del Banco Central. Por lo tanto, la eliminación de la garantía de ninguna manera significa un riesgo o peligro. Al contrario, nos evita males mayores y nos pone en el camino para que nunca más el país soporte el enorme perjuicio por el financiamiento de la garantía de los depósitos. Esto a partir de la quiebra de muchas entidades que en general fue producida por la irresponsabilidad en su manejo.

Con relación a la Superintendencia de Entidades Financieras, los artículos 43 y 44 crean el organismo denominado “Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias”, como figura similar a la de la Dirección General Impositiva con relación a Hacienda, con carácter descentralizado. De este modo se jerarquiza el rol del Banco Central en la supervisión del sistema financiero. Esto está vinculado con las cuestiones rutinarias y de control de la superintendencia, propias de este organismo. Las decisiones políticas relevantes seguirán correspondiéndole al director del Banco Central de la República Argentina.

Entre las cuestiones que merecen destacarse en esta materia, cabe mencionar el artículo 49, en el que aparece la figura de la suspensión transitoria de operaciones. Esto significa la aplicación de una medida preventiva frente a una entidad en dificultades. Es algo así como crear un feriado cambiario o bancario pero para una entidad determinada, sin que se llegue a los inconvenientes generales que surgirían de una intervención con carácter preventivo. A veces se han realizado intervenciones preventivas pero ellas provocaron una situación de mayor desconfianza. En cambio, la suspensión transitoria de operaciones es un instrumento idóneo hasta tanto se analicen las causas que la motivaron y evita riesgos futuros.

Con lo dicho con carácter general, creo que queda en consideración del honorable cuerpo un instrumento idóneo para evitar que en el país se repitan los fenómenos corrosivos de la inflación y los catastróficos efectos de la hiperinflación. Obviamente, esto está enmarcado en un contexto caracterizado por el hecho de que todos los argentinos somos conscientes —y así lo hemos expresado aquí votando muchas normas— de la necesidad de que el país tenga cambios estructurales para salir de los profundos déficit públicos financiados con emisión. La convertibilidad fue un paso importante que dio este Congreso en favor de la estabilidad.

También creemos que todas estas normas, que parecen estar muy alejadas de la gente, a la larga les traen a los ciudadanos soluciones y les evitan daños y perjuicios, que a veces no aparecen inmediatamente sino después de un tiempo en forma de inflación, hiperinflación y financiamiento del gasto de una manera espuria.

Creo que con la sanción de esta norma los legisladores daremos otra muestra de adultez como la que dimos al sancionar en los últimos años otras disposiciones destinadas a introducir una transformación para solucionar los problemas del país.

Con estas palabras dejo fundado en general el proyecto que estamos considerando.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Señor presidente: tratamos hoy un importante instrumento para el manejo de la economía del país: la carta orgánica del Banco Central. No es un tema menor. Por eso no son justas las críticas que han formulado algunos analistas de la economía por la demora que ha tenido su tratamiento en el Senado. Se trabajó pausadamente, con tranquilidad y con razona-

miento lógico en los distintos aspectos que forman parte de este complejo problema. Hubo que recurrir a quienes se han especializado académicamente en el tema y a quienes se desempeñaron en el directorio del Banco Central en diferentes épocas, bajo distintas políticas económicas y con distintos signos políticos. Fue muy útil la consulta conjunta o individual a estas personas.

Quiero decir, de todos modos, que sea cual fuere la carta orgánica que en definitiva tenga el Banco Central, aun cumpliendo con la más estricta pureza académica en lo que se refiere a la separación entre el Banco Central y la política económica del Ministerio de Economía o del sector que conduzca la política económica, ésta no cambiará por sí mismo la realidad de las necesidades que afronta el país. La actuación del Banco Central debe estar inserta en la política económica de la República como un instrumento fundamental. De acuerdo con una concepción ideológica sostenida por los asépticos en materia de política monetaria, ésta debe quedar aislada de la política económica general. Hemos tenido diálogos sobre este punto en reuniones de la comisión que funcionaba en virtud del artículo 3º de la ley de emergencia económica con participación de funcionarios del Banco Central. Mencioné entonces que por mucho tiempo el Banco Central argentino no podrá ser el Bundesbank alemán, porque la Argentina no es Alemania. Ni podrá ser tampoco, complementariamente agregó, la Reserva Federal Norteamericana, a la que se refirió durante su discurso el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Por eso es que en el dictamen hemos formulado modificaciones que nos parecen importantes para que el Banco Central mantenga la estructura de la institución que proyecta, inclusive, la política económica que existe en el país. Porque es convincente y consistente la idea de manejarnos de acuerdo con las decisiones que toman quienes conducen la política económica nacional.

Las diferencias que hemos formulado en el anexo del dictamen de la mayoría quedan expresadas en una serie de artículos, en los que señalamos las cuestiones que en muchos aspectos deben ser limitadas.

Por ejemplo, lo expresado por el señor senador por Salta en cuanto a un factor de tolerancia a las exigencias desmesuradas del Tesoro nacional ya sea por necesidades administrativas o por necesidades imperiosas por el mal manejo del gasto público.

Y es cierto que el déficit del presupuesto, evidentemente, siempre y cada vez con mayor volumen porcentual, ha exigido en más de una oportunidad la emisión lisa y llana autorizada por el Banco Central para cubrirlo.

Más de una vez hemos dicho que las necesidades de gasto en la República tuvieron distinta orientación a partir de los años 40 cuando comenzaron a aparecer grandes cifras —pequeñas a lo mejor en su origen— que fueron iniciadoras de la enfermedad que iba a tener la economía argentina, que fue la inflación, o en algún momento, en razón de los excesos en extremo, la superinflación, que se presentó durante gobiernos de distinto signo político. En efecto, existió a fines del gobierno de la señora de Perón y también al concluir su mandato el doctor Alfonsín. De manera que desde un punto de vista político no podemos alarmarnos sino que debemos tener conciencia de que hay que solucionar este asunto.

Por eso me parece bien un carta orgánica en la que se contemplen algunos aspectos que fueron muy bien mencionados por el señor senador por Salta. Hemos dado la conformidad para que no tenga demasiadas atribuciones o bocas de abastecimiento de moneda al Tesoro nacional.

En verdad, una de las limitaciones que se ha efectuado para separar la conducción del Banco Central del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía ha sido la de establecer el acuerdo para los directores.

Esta bancada, en oportunidad de tratarse la ley de emergencia económica, sostuvo que había que agregar distintos aspectos que no debían ser tratados de manera taxativa sino enumerativa. Así fue que establecimos en una de las disposiciones que se tenía que formular el diseño necesario para que los directores obtuvieran otra vez el acuerdo, como había sido originariamente.

En ese momento no fue aceptado. Por eso tengo la seguridad en cuanto a la amplitud de criterio que se puso de manifiesto en las reuniones en el Banco Central, y posteriormente en las que mantuvieron las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía. Digo amplitud de criterio por cuanto ahora fue aceptado este aspecto, situación que deseo destacar como relevante y, por cierto, satisfactoria.

El acuerdo tenía también, desde luego, la dificultad del desacuerdo como consecuencia de imposiciones constitucionales —bien señaladas con anterioridad— con respecto a las atribuciones exclusivas del presidente para designar a los funcionarios de los distintos organismos de conducción y administración.

Por este motivo se forma una entidad capaz de asesorar al Poder Ejecutivo cuando se solicite la renuncia de alguno de sus miembros. Esperamos que esta figura sea aceptada porque su afianzamiento definitivo tiene bastantes aristas conflictivas. Cuando existe continuidad política hay una serie de circunstancias, procedimientos e instrumentos que con el tiempo generan costumbres que son capaces de dar eficacia a determinados hechos.

Con respecto al tema del directorio, existiría una limitación. Se dice que a partir de la promulgación de la presente el período de duración de los directores será de seis años. Coincidimos con este plazo y con que la sustitución sea cada tres años, aunque puedan ser designados nuevamente. Es lógico que en esta función tan complicada se trate de mantener a quienes demuestren capacidad para el manejo del Banco Central, lo que desgraciadamente no siempre ocurrió. Pero estimamos que la atribución especial de los directores en el sentido de que su mandato perdure más allá del vencimiento del mandato del presidente de la República puede traer complicaciones políticas en su debido momento. Tenemos la sensación de que puede ser una figura conflictiva.

El concepto que acabo de señalar es coherente con la expresión inicial en el sentido de que la funcionalidad, atribuciones, exigencias y limitaciones del Banco Central deben estar conectadas directamente con la formulación de las políticas económicas, financieras y cambiarias.

Por este motivo, en el momento oportuno propondremos la necesidad de que el primer mandato del presidente y vicepresidente venza el 10 de diciembre de 1995, o cuando corresponda, junto con el mandato del actual presidente de la Nación. De esta forma, el presidente que asuma podrá designar con el asesoramiento que le brinde su futuro ministro de Economía a las personas que considere adecuadas para el manejo del Banco Central.

Considero que éste es un tema importante y me gustaría que fuera razonado no sólo por los integrantes de la bancada justicialista sino también por los señores senadores de los bloques provinciales, pertenecientes a otros partidos políticos. Reitero que debemos pensar mucho este asunto antes de definirlo. En caso contrario, seguramente se le plantearán dificultades de conducción al presidente que sustituya al actual.

El sistema financiero de la República, como fue expresado hace un rato, está concretado muy levemente en la Constitución Nacional. La figura del banco está indicada en dos oportuni-

dades. Por un lado, se lo menciona entre las atribuciones del Poder Legislativo, artículo 67 inciso 5), que dispone que corresponde al Congreso establecer y reglamentar un banco con facultad de emitir billetes. Hasta 1935 dichas funciones fueron del Banco de la Nación Argentina, y a partir de dicha fecha del Banco Central de la República Argentina. La Carta Orgánica, las leyes financieras, la organización de los bancos y todo lo que signifique una movilización de orden cambiario, financiero o monetario se ha establecido por ley.

La otra indicación se deduce del artículo 31 de la Constitución Nacional; de éste se extrae la existencia del banco para la provincia de Buenos Aires. Con la reforma de 1860, en razón de la constitución definitiva de la Nación, la provincia de Buenos Aires se reservó el derecho de la administración, conducción y gestión de este banco.

Las constituciones provinciales poseen distintos artículos que indican la obligación de cada provincia de tener su banco provincial, o bien delegan esta facultad en el Poder Ejecutivo. Por ello, la creación de estos bancos obedece a leyes oficiales.

En 1935 se crea el Banco Central como consecuencia de una misión británica que lo aconsejó, luego de un importante estudio de la economía del país afectada fundamentalmente por la gran crisis económica que existió en el mundo y que la Argentina sufrió directamente, y en forma muy fuerte, por cuanto estaba insertada prácticamente en el ordenamiento económico de Gran Bretaña.

Así, con sus propias dificultades, con las de los demás países europeos y con las de los Estados Unidos —que atravesaba la famosa crisis del 30—, se produjeron situaciones especiales, que en el caso de la Argentina desembocaron en el Pacto Roca-Runciman.

En aquel proyecto —que desde luego fue aprobado por ley: figuraba el acuerdo del presidente y del vicepresidente. Los fundadores del banco y quienes participaron en la organización del mismo —entre ellos, el doctor Prebisch, a quien en más de una oportunidad hemos destacado por sus relevantes conocimientos en los temas financieros y económicos—, sabían bien lo que aconsejaban. De esa manera, el procedimiento para los cambios de los funcionarios resultaba más lento.

En ese momento el Banco Central era mixto. Se creó a través de un acuerdo entre el gobierno nacional, la banca nacional y la banca extranjera,

y su directorio, desde entonces y hasta mucho tiempo después, estuvo formado por los presidentes del Banco de la Nación, de la Caja de Ahorro y del Banco Hipotecario. Muy posteriormente, cuando nació el Banco Industrial Argentino —luego llamado BANADE—, también se incorporó al directorio.

En la época de creación del Banco Central, hubo varias otras instituciones que también asomaron a la vida económica de la República debido a necesidades imperiosas del momento. Por ejemplo, podemos mencionar al Instituto Movilizador de Inversiones. Además, se reformó la Carta Orgánica del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario. El ciclo se cierra con la ley 12.160, donde se establecen los elementos que permiten trasladar la administración monetaria de la República del sector público al privado.

Asimismo, se crea la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, dos organismos que han sido eliminados por el decreto de desregulación, que también hemos conocido sorpresivamente. Ya hablaremos de esto en su momento, porque constituye otro tema de gran importancia.

El sistema que hemos referido llega hasta 1946. Por eso quiero decir, antes de seguir adelante, que las diferentes reestructuraciones del sistema, las variadas modificaciones de las leyes respectivas y la creación de situaciones especiales que permitieron pactar las necesidades del momento, tuvieron una simetría exacta con el entorno político de la República. De esto no cabe ninguna duda.

Cada vez que hubo un cambio institucional en la República hubo cambios también en materia financiera, que desde luego tuvieron una repercusión manifiesta en la conducción y orientación de la administración del Banco Central como cabeza madre o banco de los bancos.

Entonces, en 1946 cae el sistema instaurado en 1943 y se inicia otro sistema por decretos del gobierno que tiempo después entrega el poder a quien había ganado las elecciones del 24 de febrero de 1946. Es decir, que se adopta un sistema a través de decretos leyes, y cuando se hace cargo el nuevo gobierno ya tiene adecuado ese sector a lo que pensaba hacer.

Se nacionaliza el Banco Central, finalizándose así con el sistema de banco mixto, cosa que se mantiene hasta el momento. Así aparece una nueva figura institucional de la administración de la moneda, que es la nacionalización de los depósitos. A partir de entonces esta figura apareció por algunos momentos y desapareció en

otros según que un gobierno tuviera el signo justicialista o militar.

Como consecuencia de la nacionalización de los depósitos los bancos pasan a ser mandatarios del Banco Central.

En 1949 comienza un tercer período dentro de la política del Poder Ejecutivo del gobierno que asumió en 1946, produciéndose algunas adecuaciones a la estructura creada anteriormente. Por ejemplo, por medio de la ley 13.571, de 1949, se suprimen funciones que son materia rectora en cuestiones económicas. Se busca la forma de eliminar las aristas de independencia que tenía el Banco Central en el manejo de la cosa pública y en particular de la moneda. También se elimina la superintendencia de la juntas —me refiero a la Junta Nacional de Carnes y a la Junta Nacional de Granos— que hasta entonces tenía como función este banco.

A partir de esa ley el Banco depende orgánicamente del Ministerio de Finanzas, recientemente creado, y el ministro de esa cartera y el subsecretario de Finanzas —en aquel momento prácticamente no existían los secretarios, lo que demuestra cómo posteriormente fueron creciendo los gastos por la creación de estos cargos— pasan a ser presidente y vicepresidente de la institución y se suspende la convertibilidad. Como vemos, esta reforma que también tenía un signo justicialista lleva otro tipo de motivación.

En ese año 1949 también se lleva a cabo la reforma de la Constitución Nacional, la que en su artículo 68, referido a las facultades del Poder Legislativo —equivalente al artículo 67 actual— se establece claramente que el Poder Legislativo tiene todas las atribuciones para legislar sobre régimen bancario, crédito y emisión de billetes. Es decir, que se define un marco jurídico adecuado con el sistema económico que existía en ese momento.

Luego aparece un cuarto período, totalmente distinto, que se inicia en 1956 como consecuencia de la toma del gobierno por parte de un sector militar. Se formulan nuevas normas, un nuevo reordenamiento bancario. Entonces, se empezó a hablar de los “decretos-leyes” en virtud de los cuales se normalizaban, entre otras cosas, los depósitos bancarios, al igual que en todos los bancos del mundo. Es decir, se operaba la desnacionalización de los depósitos, volviendo a la situación anterior a la nacionalización.

También se comenzaba a hablar del saneamiento de la cartera de los bancos oficiales. A consecuencia de la crisis del 30, no habiéndose

podido reconstruir las carteras de los bancos, tanto oficiales como privados, se recurrió al mecanismo de los llamados “bonos de saneamiento”, los que también sirvieron para solventar los déficit del IAPI y de otros organismos estatales.

Señalo esto porque se trata de un factor importante en la historia del Presupuesto de la Administración Pública. A partir de allí comenzó la costumbre de adosar al Presupuesto General de la Nación los déficit de organismos que tenían otras atribuciones y que gastaban fondos más allá de las disposiciones presupuestarias para atender cuestiones que no hacían a la real gestión del Estado, ahora tan expandido. Por eso me parece bien esto de la reformulación del Estado.

Quiero aclarar que no estoy en contra del IAPI. Sí quise señalar que sus pérdidas dieron origen a un principio de inflación que al no haberse podido parar nunca fue paulatinamente en ascenso. La inflación es como la bola de nieve: empieza siendo pequeña, pero si no se para termina como la que hemos visto en más de una oportunidad, tal como dije hace un momento.

La ley 13.126, de 1949, restituyó la autarquía que tenía el Banco Central. Es decir, los directores debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo, pero de cualquier manera mantenían su autoridad en forma diferenciada de los ministros y viceministros puesto que tenían una acción más autárquica, desde el punto de vista administrativo y de gestión.

En 1956, como ocurrió en otras oportunidades, se reformaron las cartas orgánicas del Banco Hipotecario, del Nación y del Industrial, que ya había sido creado, como todos sabemos, a partir de una propiedad enemiga confiscada; me refiero al Banco Transatlántico, de origen alemán.

En los años 69, 73 y 78 se van haciendo sucesivas modificaciones a la carta orgánica del Banco Central, de manera errática y no consistente.

La reforma de 1973, nuevamente al inicio de un gobierno justicialista, vuelve a nacionalizar los depósitos. Después nos preguntamos por qué nos fue mal. No digo que esté mal la nacionalización sino las idas y vueltas permanentes, con una conducta errática en la que se confundieron ideologismos con necesidades económicas.

Decía que se nacionalizaron los depósitos por medio de la ley 20.520. A través de la ley 20.539 de 1973 se aprobó una nueva carta orgánica del Banco Central que prácticamente es la que hoy

está en vigencia, hasta tanto aprobelemos, con más o menos modificaciones, el proyecto que estamos analizando. Esta ley que acabo de citar tuvo muy pocas modificaciones a través de los últimos años.

Así llegamos a 1978 y, ¿qué sucede? Había sido derrocado el gobierno constitucional en 1976. Parecería que fue una ley de oro. Vuelve nuevamente a reformarse todo el sistema financiero del país. ¿Y qué se les ocurre primero? Desnacionalizar. Parecería que esta última reforma hubiera sido resultado de la erupción de un volcán, porque a partir de 1978 hubo un sobredimensionamiento del sistema financiero, y fue difícilísimo poder controlar la política monetaria. Ello era así porque la estructura era enorme debido al surgimiento de bancos y compañías financieras de todo tipo y carácter tal que ni siquiera el Banco Central podía controlar.

Esto es lo que interpreto porque multitud de empresas, de sociedades, fueron siendo liquidadas paulatinamente y rematadas. Ello ocurrió también con una enorme pérdida para el Banco Central como consecuencia de no haber manejado la situación debidamente.

Al respecto cabe consignar lo ocurrido con la liquidación del Banco de Avellaneda, que salió publicado hoy en los diarios. No se conocen las causas, quizá por una falta de información a nivel público, y quién sabe cuántos litigios habrá, comenzando por los propios depositantes. No hubo una publicidad adecuada del caso, y al respecto formularemos un pedido de informes. Esperaremos el informe del Banco Central sobre este tema. Ocurre que creíamos que se habían terminado las malas gestiones en cuanto a la definición de asuntos de esta naturaleza, en donde se juega la posibilidad de grandes pérdidas para el Estado, que en realidad las paga todo el país a través de los déficit del presupuesto.

Esta situación llega muy especialmente al sector de los trabajadores en el que de una u otra manera, a pesar de que se hable de la garantía respecto de sus puestos o ingresos, se van sucediendo los despidos, que no solamente llevan a una disminución de la calidad de vida sino que también complican el ordenamiento social de la República. Sobre este tema después explicaré por qué con una de nuestras modificaciones pueden evitarse situaciones de esta naturaleza.

Entrando al tema específico de las modificaciones que estamos considerando, deseo referirme exclusivamente a esos aspectos, porque en cuanto a los otros estamos totalmente de acuerdo con el proyecto que fuimos elaborando en conjunto. Que esto quede bien claro.

Estamos satisfechos por la incorporación de algunas figuras que propusimos en su momento, como por ejemplo lo del acuerdo y lo de la superintendencia de empresas financieras y cambiarias, es decir, el órgano o ente de control de la actividad privada en el manejo de estos asuntos.

¿Cuáles son las diferencias a que aludo? Tienen que ver con la concepción intelectual que manejaba en mi discurso, en relación a que el Banco Central debe tener sus limitaciones, muchas de las cuales hemos aceptado, pero no debiera haber tantas como las establecidas en los artículos del proyecto, tal como veremos luego. Ello para no cortar las manos, más allá de las necesidades. Ocurre que debe contarse con los recursos adecuados para asistir al sistema, no sólo en los momentos estacionales de deficiencias de caja.

El Banco Central no es una isla.

Por esa razón hemos modificado algunos artículos a fin de mantener la comunicación entre la conducción del Banco Central y la conducción del poder político con respecto al manejo de la economía evitando las distorsiones propias que se producirían si existieran dos cabezas que manejaran la economía del país. Digo esto porque mal puede manejarse la economía si no se tiene suficiente ascendencia en la formación de la política monetaria.

Uno de los artículos que mencionamos tiene en cuenta precisamente que el presidente y vicepresidente actuales del Banco Central terminen su período en 1995, al mismo tiempo que el presidente de la Nación actual, para que el que lo suceda pueda designar un presidente y un vicepresidente de la entidad que responda a la misma orientación político-económica de ese momento, sea del mismo signo partidario o no. Espero que ese artículo sea aceptado por los señores senadores.

Me parece muy bien que el sistema permita —como expresó el señor senador por Salta— que los directores tengan continuidad en la gestión. Esto es muy importante cuando se trabaja seriamente en la atención de los problemas de la República. Los cambios rápidos, sin ser analizados a fondo, con el afán de mover de un lado a otro a los ministros, secretarios y otros funcionarios, determinan que nadie sepa nada. No quiero decir que esto ocurre con este gobierno; por el contrario, sucede con casi todos los gobiernos.

Cuando un funcionario es puesto en un nivel de conducción especializada sin haber cumplido antes tareas equivalentes no conoce a fondo los



temas. Y si se producen cambios rápidos de funcionarios para atender diversas funciones de Estado, me gustaría saber cómo anda una administración de esa naturaleza. Pero ésta es otra cuestión.

Voy a entrar en el análisis particularizado, artículo por artículo. Estamos de acuerdo con los artículos 1º y 2º y no vamos a entrar a debatir las definiciones de moneda y de emisión.

Sí he de referirme al artículo 3º, que dice textualmente: "El Banco deberá desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor —estamos de acuerdo— e instrumento de pago —también estamos de acuerdo— para...". Aquí falta la tercera función de la moneda, que es la de ser unidad de cuenta, la de cuantificar las transacciones económicas.

Aunque la función de unidad de cuenta de la moneda igual se va a cumplir, que no figure en la Carta Orgánica del Banco Central puede dar la sensación de que no se conocen bien las funciones que debe cumplir la moneda.

El tercer párrafo del artículo 3º dice: "En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera del Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del Estado Federal". Esto es excesivo y a la vez innecesario.

Nosotros consideramos que debe existir una conducción mayor en lo que atañe a la administración monetaria realizada a través del Banco Central. En ese sentido, pensamos que el Banco Central no debe formular la política monetaria sino ejecutarla.

Además, al decir que el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del Estado Federal, da la impresión de que tampoco recibe órdenes del Poder Ejecutivo. Creo que este párrafo debe ser eliminado a fin de evitar confusiones. Porque no sabemos quiénes son las autoridades que van a actuar en la materia. Hoy conocemos a las actuales. A mi criterio tienen condiciones sobresalientes en el manejo de este tema y son especialistas en aspectos monetarios, cambiarios y financieros. Pero nosotros tenemos que legislar para el futuro sin pensar quiénes van a estar.

Ante esto, tengo una sensación alarmante porque pareceríamos estar en presencia de un acto revolucionario, algo así como una toma de posiciones demasiado exigente en la conducción política y administrativa.

El inciso a) del artículo 4º expresa "Regular la cantidad de dinero y observar la evolución del

crédito...". Al respecto, nosotros entendemos que deben invertirse los términos. Estimamos que debe decir "regular la evolución del crédito y observar la cantidad de dinero en la economía".

¿Por qué sostenemos esto? Porque según nuestro criterio aceptar el texto del dictamen sería poner el carro delante de los caballos. Primero debemos saber qué economía tenemos; segundo, qué proyección de desarrollo queremos; tercero, qué nivel de crecimiento estimamos, y en consecuencia qué inversión necesitamos, qué capitales para la inversión genuina tenemos y qué crédito debe complementarla. En razón de éste podremos determinar la moneda que necesitamos y observarla en cuanto a su mecánica.

Esta es nuestra visión acerca del tema: tenemos un concepto de política dinámica y no estática. Si primero se regula la moneda y después se ve qué hacemos con el crédito nos quedamos sumidos en un tema en el que de ninguna manera podremos llegar a tener la fluidez de manejo necesaria para obtener desarrollo y crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades y carencias actuales de los argentinos.

En el inciso d) del artículo 4º pretendemos incorporar un concepto que figura en el anexo que hemos hecho llegar a Secretaría.

Proponemos agregar al comienzo: "Ejecutar la política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con asesoramiento del Banco Central de la República Argentina", continuando con el texto que figura en el dictamen de comisión: "concentrar y administrar, en su carácter de agente financiero del Estado Federal, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos...". Este agregado responde a nuestra coherencia en cuanto a la orientación política sustentada en este tema.

Sé que este asunto es escabroso. No todos los senadores aquí presentes somos iniciados en el tema. Pero considero que cuestiones como ésta deben quedar registradas en la versión taquigráfica para que en el futuro puedan ser leídas nuestras opiniones. Digo esto en tono jocoso porque en realidad creo que nunca va a suceder. (Risas.)

En el artículo 5º proponemos un agregado. Este artículo establece: "El capital del Banco quedará establecido en el balance inicial que se presentará al momento de promulgarse la presente ley". Este asunto fue objeto de profundo debate en el seno de las comisiones intervinientes. Hubo diferentes consideraciones por

parte de los técnicos y conocedores del tema, según las orientaciones en materia de doctrina económica.

Estamos de acuerdo con que se deberá representar la situación del Banco Central con una fotografía de su estado al momento de promulgarse esta ley.

Entonces proponemos que luego de "la presente ley" se agregue la expresión "quedando su peditada su vigencia a la sanción de dicha norma complementaria". La intención es dar un marco de exigibilidad en cuanto a la existencia del balance.

Además, la Carta Orgánica no entrará en vigencia mientras no se defina el capital, que es un elemento muy importante para conocer la responsabilidad de la institución. Por otra parte, se trata de un ítem objeto de atención desde el exterior, cosa que no nos parece mal. Tal el caso del Banco Mundial, que comparte más o menos el criterio al que estoy haciendo referencia.

Queremos introducir una modificación en el artículo 6º para establecer una diferencia en cuanto a la exigencia de conocimientos financieros. Tal como está redactado el artículo, la exigencia de conocimientos financieros alcanza a todos los directores. Dice: "El Banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y ocho directores. Todos ellos deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad —esto, por otra parte, es un requisito constitucional— en materia monetaria, bancaria, o legal vinculada al área financiera...".

Se desprende entonces que los directores deberán tener conocimientos, experiencia e idoneidad derivados de haber trabajado en las áreas monetaria o bancaria. Quiere decir que sólo podrán ser directores quienes hayan pasado por la función privada, dejando de lado a los especialistas interesados en el tema, a los conocedores de estos temas desde un punto de vista académico, a los profesores. Es decir que se deja de lado a una importantísima cantidad de hombres idóneos, intelectuales en la materia. Hemos pensado en una redacción en la que la idoneidad incluya el campo económico y el conocimiento del área financiera rija nada más que para los aspectos legales, es decir, para quienes se ocupen del asesoramiento legal, que deberán ser abogados que entiendan en cuestiones financieras. Me parece que ésta sería una modificación importante ya que cualquiera de los directores podría ser impugnado si en los diez años anteriores a su designación hubieran estado a cargo de pro-

blemas monetarios, bancarios o cambiarios de cualquier ente privado o en la función pública.

El artículo 7º se refiere a la duración en sus funciones del presidente, el vicepresidente y los directores.

Proponemos agregar en el primer párrafo del artículo 14 la expresión "la ejecución de ...". En esto nos mantenemos coherentes con nuestra idea de que deben quedar bajo el mismo hilo de conducción el Banco Central y la política económica. Creo que en este punto no puede pasarse de un extremo a otro. Por eso el artículo debería estar redactado así: "El directorio determina la ejecución de ...". De esta manera se hace referencia exclusivamente a la ejecución de la política formulada por el Poder Ejecutivo o por alguna ley especial.

Hay un tema que no fue incluido en el anexo porque se nos escapó: la inexistencia de la gerencia general. Nosotros creemos que ella debe existir. Así ha funcionado el Banco Central infinidad de años, desde aquellas famosas gerencias del doctor Prebisch. Entiendo que es un buen sistema que evita mezclar al directorio en gestiones directas que a mi criterio han hecho muy mal a la conducción del Banco y seguramente también a infinidad de quebrantos que son los que después llamamos los déficit cuasifiscales. Porque recordemos que hemos anulado la Cuenta de Regulación Monetaria pero eso no tiene nada que ver porque es solamente el nombre de una cuenta a la que va a parar la pérdida que tiene el Banco Central por una u otra razón, y eventualmente, si es que las hay, las utilidades, que disminuyen esa pérdida. Muchas veces esos conceptos figuran en el activo porque si se los declarara como pérdidas se hallaría el Banco Central sin el capital suficiente.

En el inciso b) del artículo 15 donde dice que las atribuciones que tiene el órgano del Directorio es designar a los subgerentes generales, etcétera, nosotros proponemos designar al gerente general y a los subgerentes. Nuestra idea fundamental es que deben delimitarse las funciones de quién ejecuta y de quién dirige. No me convence el hecho de que haya directores —nunca me convenció, incluso en tiempos en que el gobierno era del signo de mi partido político— que se introduzcan en la gestión de las cosas, porque es muy difícil que separen sus propias inclinaciones de la responsabilidad de tener que conducir. Está bien que exista división en comisiones porque ello permite la especialización, la división y distribución de tareas, pero no es conveniente que se hagan cargo de situaciones específicas de los gerentes. Si ese gerente no sirve se

harán los cargos necesarios, se lo cambiará de lugar, por ejemplo. Hay demasiadas atribuciones del Directorio como para modificar este tema. Pero lo fundamental es, si no hay un gerente general, que se confunde la conducción con la ejecución. Eso es peligroso.

Por ello, continuando con esta línea de argumentos, en el artículo 16, donde se dice que la administración del banco será ejercida por intermedio de los subgerentes generales, nosotros decimos que será por intermedio de un gerente general y tres subgerentes generales, para evitar el exceso de conductores de la ejecución, lo que ha traído problemas cuando el número fue excedido.

Debemos tener en cuenta que uno de los subgerentes actuales cubre la etapa de la superintendencia y que por esta Carta Orgánica, por sugerencias y explicaciones nuestras, la Superintendencia que controla el sistema debe ser ajena al gerente general para evitar la confusión entre quienes otorgan situaciones y quienes las controlan. En definitiva, ese superintendente no deja de ser un gerente general y depende directamente del presidente del banco, donde no se rompe la estructura mayor, pero se separa entre lo que se ejecuta, lo que se permite, lo que se controla y lo que se pretende eliminar del sistema monetario y bancario. Cuando no ocurrió de esta manera se presentaron dificultades.

En el artículo 19 se pretende la eliminación de tres incisos: d), i) y k). Comienza la redacción diciendo que queda prohibido al banco... No nos parece necesario que se diga que queda prohibido, que la conducción diga si tiene que hacerlo en su momento o no, que son aspectos netamente funcionales del Banco Central y que no dependen del Poder Ejecutivo. Podrá ser que políticamente el Poder Ejecutivo, a través de sus funcionarios, trate de influir en los directores para que tomen una decisión u otra. Pero, ¿para qué entorpecer una gestión necesaria limitando y prohibiendo? Entonces no nos parece necesario que esté prohibido efectuar redescuentos, adelantos u otras operaciones de crédito excepto en los casos previstos por el artículo 17, que podrían provocar déficit estacionales. Ya verá qué hace en su momento el banco. El mismo sentido tiene la prohibición de emitir títulos, bonos o certificados de participación, de colocación o de cumplimiento obligatorio para las entidades financieras. El directorio deberá tener en cuenta si ordena o articula este tema de acuerdo con las exigencias del momento o no. Se trata de previsiones de prohibición; por lo tanto, considera

importante eliminarlas. El mismo argumento es aplicable al inciso k) del artículo 19.

Consideramos correcta la redacción del primer párrafo del artículo 20. El segundo párrafo expresa: "El crecimiento de las tenencias de títulos públicos del banco, a valor nominal, no podrá ser superior al diez por ciento (10 %) por año calendario." No tengo ninguna explicación de dónde salió este porcentaje del diez por ciento. ¿Hay algún cálculo matemático, financiero, actuarial que permita determinar dicho porcentaje? ¿O es convencional? Podría haberse puesto el 8, 12 ó 20 por ciento.

Creo que esto es un cepo a las necesidades propias del manejo de situaciones de esta naturaleza en el banco, si se toman más o menos bonos, por ejemplo, debió quedar como una atribución de la gestión del directorio del banco. ¿Por qué limitarlo en este tipo de porcentaje, especialmente teniendo en cuenta que no existe una explicación racional para su manejo? Si es que existe, debo decir que no llegó a mi conocimiento.

El artículo 28 del proyecto contiene otra limitación sobre los efectivos mínimos. El párrafo segundo establece: "No podrá exigirse la constitución de otro tipo de depósitos indisponibles o inmovilizaciones a las instituciones financieras." Es decir que lo que le está permitido al Banco Central, con el objeto de influir en la cantidad de dinero es exigir que las instituciones financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos y otros pasivos. ¿Por qué no puede aplicar el Banco Central al sistema, en razón de necesidades técnicas o políticas de conducción, algún otro tipo de depósito o retenciones, como está indicado acá? El directorio, formado por hombres idóneos en la materia, decidirá si debe hacerlo o no y en qué medida incide esto en la política monetaria, circulante o de movilización de los créditos. Pero entendemos que no debe prohibírselo.

En el artículo 29 queremos proponer un agregado que figuraba en la Carta anterior y razonablemente estaba bien. Actualmente, a raíz de la ley de convertibilidad, existe la creencia de que debe suprimírselo, lo que no es necesario.

Entendemos que debe incluirse como inciso c) el siguiente texto: "Entender en el ingreso de las divisas provenientes de las exportaciones y otros conceptos (pueden ser intereses del exterior, rentas, etcétera) y en su asignación para el pago de importaciones, servicios y otras remesas (intereses que pagamos, devolución de remesas, de dividendos, etcétera)". Este inciso debe fi-

gurar en la Carta Orgánica y no es necesario cambiarlo o suprimirlo.

El artículo 36 se refiere a la sindicatura. Consideramos que ésta no puede ser única, desempeñada por un abogado, un contador público o un licenciado en Economía. Consideramos que esta figura es exclusivamente técnica, y según nuestro criterio debería crearse una comisión fiscalizadora de tres miembros.

Proponemos el siguiente texto: "La observancia por el Banco Central de la República Argentina de las disposiciones de esta Carta Orgánica y demás normas aplicables será fiscalizada por una comisión fiscalizadora de tres miembros, nombrados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado." O sea que los síndicos no tienen vinculación con los directores. "Sus actuaciones comprenderán a la superintendencia de entidades financieras y cambiarias.

"Los síndicos serán un abogado, un contador público y un licenciado en economía. Durarán cuatro años en sus funciones, al término de las cuales podrán ser designados nuevamente."

¿Qué sucede entonces? Si hubiera una comisión fiscalizadora integrada por un contador público, un licenciado en economía y un abogado conocedor de los aspectos bancarios al tratar su intervención, por tener atribuciones conforme al primer párrafo del artículo 36, tendrían conocimiento de las situaciones de cada una de las entidades que controla la superintendencia y no serían tan sorprendentes las situaciones de liquidación o quebranto o intervenciones, y en definitiva disolución de este tipo de entidades. Me refiero a casos como el que mencionábamos antes, que conocimos repentinamente al leer los diarios: estoy hablando de la liquidación del Banco de Avellaneda. Estas situaciones no se darían porque habría avisos previos, señales de deterioros, que igualmente existen aun no diciendo nada, porque el sistema permite la transmisión de estos temas conocidos burdamente, en torno de los cuales se detienen los depositantes cuando observan medidas cautelares impuestas por el Banco Central.

A mi criterio, este procedimiento debe tener un período de análisis mucho menor, a los efectos de liquidar rápidamente el tema. Porque, después, como ha sucedido como consecuencia de la modificación de 1978, el Estado tiene enormes juicios que seguramente va a perder, que iniciaron los anteriores dueños del capital accionario, los que poco se acuerdan de sus bancos porque ya tienen una cuenta muy fácil de cobrar, aunque ahora les den bonos de consolidación. Por eso, creo que tendría que

haber habido desagio, aunque esos bonos de consolidación van a servir para la adquisición de otro tipo de intereses a través de las privatizaciones.

Otro tema que pretendíamos cambiar es el referido al título relativo al Tribunal de Cuentas. A nuestro criterio, debe decir: "órgano de control externo" porque en este momento está en trámite en la Cámara de Diputados la creación de un órgano con otro tipo de atribuciones que las que tiene el Tribunal de Cuentas. Nos anticipamos a decir que existe una opinión favorable respecto de ese tipo de contralor. Pero al Tribunal de Cuentas, cuya designación podría ser cambiada si así lo aprueba este cuerpo, se lo limita a analizar exclusivamente los gastos que tiene el Banco Central. Me refiero, por ejemplo, a los gastos de representación o por viáticos, ya que el Tribunal de Cuentas se rige por la Ley de Contabilidad.

A nosotros nos parece que debería existir una auditoría completa por parte del nuevo órgano de control externo, para que el Congreso sea notificado de los balances, de la gestión del banco y de las funciones y actuaciones que ha tenido la superintendencia de contralor, de la forma en que el artículo anterior lo establece. No nos oponemos a que existan auditores externos. Nuestros balances del Banco Central son auditados, observados y tenidos en cuenta en el momento de tener que estar negociando la deuda o los créditos. Es lógico que las entidades internacionales que van a negociar con el Banco Central requieran el respaldo de auditores que nada tengan que ver con esta institución. Seguramente si los que firman las auditorías externas no poseen la totalidad de las calidades que esperan de ellos recurrirán a otros para tener seguridad en la información.

El Congreso de la Nación debe contar con la información adecuada del ente de contralor externo del sector público, que debe incluir lo relativo a la actividad del Banco Central, su gestión y el estado en que se encuentra la superintendencia sobre las distintas entidades bancarias. A este respecto estamos viendo cómo aún no ha concluido la etapa de liquidaciones e intervenciones.

De lo contrario, el Congreso se va a enterar de la situación del Banco Central a través de auditorías que no responden a las responsabilidades de funcionarios públicos, sino a puntos de vista de entidades privadas, que tienen sus propios criterios de valuación patrimonial, de utilidades y de gestión, que no siempre son compatibles con nuestras interpretaciones.

Espero que esto también sea tenido en cuenta en el momento de abocarse a la cuestión, porque puede afectar la calidad de los datos que debemos tener del Banco Central.

El artículo 58 está relacionado con la figura del presidente y del vicepresidente. Pero de ello ya hablamos.

Con respecto a los artículos 61 y 62, proponemos que el 61 pase como 63 y que mientras no se resuelvan los problemas de la garantía de los depósitos y de la creación de un banco de importación y exportación queden cubiertas las brechas que pudieran existir en la legislación. Es decir que pedimos que transitoriamente queden las cosas como están en la Carta Orgánica vigente.

Me parece muy importante que haya una referencia a la garantía de los depósitos, porque ya hemos visto en estos días cómo los mercados se anticipan al proyecto de ley, y además, por razones de tipo económico podemos ver cómo los bancos más importantes, tanto extranjeros como nacionales, han suspendido el sistema de garantías. Por sus propios volúmenes de funcionamiento mejoran de esta manera su rentabilidad dando a su vez una sensación de poderío. Pero cuando el sistema esté suspendido las entidades financieras que tengan depósitos con garantía hasta mil dólares se van a encontrar con una restricción y una huida de depósitos al quedar de manifiesto su endeble situación financiera y patrimonial.

En materia de comercio exterior el país necesita de las exportaciones e importaciones para su desarrollo y la incorporación de nueva tecnología. Para ello es necesario que el Banco Central tenga las atribuciones que ha tenido hasta ahora y no se produzca una brecha mientras se decida la creación de una nueva institución que se haga cargo del tema, como podría ser un banco de exportación e importación.

Más allá de las necesidades que por su propia gestión tiene la conducción actual, totalmente loables y humanamente comprensibles, deseo que se tenga en cuenta esto que expreso. Estoy seguro de que con este proyecto no tendremos ningún temor de que se cometa algún exceso o desviación en la conducción política. A su vez, sé que los que están designados responden a la misma concepción académica e intelectual del actual ministro de Economía. De cualquier modo, nosotros legislamos para adelante y no estamos pensando solamente en este momento, por lo que no hay que referirse a quienes hoy están ocupando los cargos.

Votaremos en general a favor del proyecto porque estamos de acuerdo con la necesidad de establecer una nueva Carta Orgánica para el Banco Central. En particular, insistiremos en nuestra posición, que figura en el anexo del dictamen que estamos analizando.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Bravo.** — (*Lee*) "Señor presidente: el tema que nos ocupa no es nuevo en el Congreso, ya que en los últimos años se han presentado varios proyectos modificatorios de la Carta Orgánica del Banco Central. Por eso voy a obviar consideraciones que las doy por conocidas en honor a la brevedad de mi exposición.

No obstante ello, debo reconocer que el proyecto que hoy analizamos es uno de los más breves y precisos que he tenido la oportunidad de conocer y ya por esas características me animo a decir que aventaja a los otros que se han presentado en ambas Cámaras del Congreso.

Quiero señalar además que tengo la sensación de que el Poder Legislativo está en mora con respecto a la sanción de esta norma, cuya modificación fue prevista en el artículo 3º de la ley 23.697, de emergencia económica.

Si tenemos presente que se han cumplido ya dos años desde la sanción de esa ley, se podrá comprender claramente la necesidad de proceder a sancionar el proyecto que se ha puesto a nuestra consideración. Y esto tanto más si se advierte que un proyecto de esta naturaleza no se agota en lo estrictamente económico.

Porque si bien la Carta Orgánica del Banco Central es un instrumento técnico de política monetaria, a la vez que regula la actividad del organismo rector en la materia, nadie puede discutir la trascendencia política que posee. Están frescos aún en la memoria de los argentinos los alcances que han tenido, en las últimas crisis económicas que soportó el país, las graves decisiones adoptadas por el Banco Central, anunciadas a los operadores del sistema financiero por medio de anónimos comunicados telefónicos en muchos casos.

El Banco Central ha tenido más poder en su ámbito que el propio Congreso de la Nación, y mucho me temo que se requieran años de estabilidad económica y política para que esas potestades puedan conjugarse armónicamente con las instituciones de la República. En este aspecto, hará más la estabilidad y el libre desenvolvimiento de los mercados que los límites que hipotéticamente puedan establecerse por imperio de la ley. Esto indica que sin dejar de aceptar que

el Banco Central, por la naturaleza de sus funciones, no puede estar sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del Estado federal, tal como dice el proyecto, el solo hecho de reconocerlo nos da la dimensión de las atribuciones con que contará el nuevo organismo.

Pero esto no parece ser novedad en el mundo desarrollado donde organismos similares como la Reserva Federal en los Estados Unidos de América, el Bundesbank en Alemania o el Banco de Francia, poseen atribuciones semejantes a las que el proyecto le otorga a nuestro Banco Central en materia monetaria. La diferencia, vuelvo a señalarlo, está no tanto en la ley reguladora de esas potestades sino en la realidad económica sobre la que han de aplicarse.

Por eso, si es cierto que nuestro país aspira a entrar en el mundo desarrollado, no parece insensato dotarlo de los instrumentos legales que rigen las relaciones económicas en esa clase de países.

Por otra parte, debo reconocer que aunque tenga ciertas dudas sobre el funcionamiento real de la relación entre el Banco Central y el Congreso, en el artículo 3º del proyecto se establece explícitamente que la política monetaria y financiera del Banco Central, dirigida a salvaguardar las funciones del dinero, se deberá realizar en un todo de acuerdo con la legislación que dicte el Honorable Congreso de la Nación.

Por lo tanto, si bien es cierto que el organismo monetario necesita moverse con la suficiente independencia respecto de los avatares políticos, queda claro que esa independencia no lo puede llevar a incumplir el marco legal que le fije el propio Congreso. Dependerá también del Poder Legislativo hacer valer en todo momento sus atribuciones legales, además de las que le confiere la propia Constitución.

Esa vocación de independencia, entiendo, está manifestada también en la configuración que el proyecto le ha otorgado a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que tiene la delicada función de supervisar la actividad del mercado financiero.

Sea por la desconcentración de sus facultades, sea por la designación del superintendente, que no la hará el presidente del Banco Central sino el propio Poder Ejecutivo, estimo que el control de las entidades bancarias y cambiarias puede llegar a ser realmente estricto y libre de presiones ocasionales. Lo mismo podría decirse de las prohibiciones expresas que se establecen para el Banco Central en el artículo 19 del pro-

yecto, tales como los préstamos, redescuentos y subsidios en general, cuya real eliminación hace a la salud monetaria del país.

Señor presidente: a la luz de lo dicho, quiero expresar que mi bancada va a dar el voto favorable a esta iniciativa, admitiendo que podrían discutirse algunos detalles, como se hace en la disidencia que acompaña al dictamen de comisión pero que en realidad carecen de envergadura como para demorar la sanción que el cuerpo debe prestar a este proyecto. Toda ley es perfectible, pero a veces la perfectibilidad puede conspirar contra el logro de lo principal.

El partido al cual pertenezco, el bloquismo sanjuanino, como fuerza provincial está dispuesto a acompañar los grandes proyectos nacionales que contribuyan al progreso y a la modernización del país en su conjunto. Y en este caso creemos modestamente que el proyecto de Carta Orgánica del Banco Central está orientado en la dirección correcta. No perdamos tiempo entonces en discusiones insustanciales.

Es mucho todavía lo que resta por hacer para que el país pueda ver consolidada su situación económica. Los bloquistas estamos dispuestos a colaborar para que el avance se acelere en beneficio de todos los argentinos, es decir, de nuestro pueblo."

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris**. — Señor presidente: creo que los señores senadores preopinantes han sido suficientemente amplios en un tema realmente importante. Además, creo que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una cuestión que viene a constituir un avance en lo que atañe incluso a las facultades del Congreso de la Nación. Por eso quiero evitar ser muy extenso en mi exposición tratando de ser lo más concreto posible.

La vivencia en nuestro país, por primera vez en su historia, del proceso hiperinflacionario de los meses de abril a julio de 1989 provocó sin duda alguna un cambio profundo en la conducta de sus habitantes y en sus hábitos económicos, comportamiento que se consolidó como consecuencia del rebrote hiperinflacionario ocurrido entre diciembre de ese año y marzo de 1990.

La pérdida sustantiva del valor de la moneda producida en poco menos de un año, significando sólo el 3 por mil de su monto inicial, demostraba la necesidad imperiosa de cambiar las reglas referidas a la política monetaria y fiscal.

Había quedado claramente expuesto que el proceso de alta inflación vivido por la Argentina

con intensidad creciente desde comienzos de la década del 70, tenía por origen la financiación espuria que hacía el gobierno nacional de sus erogaciones a través de la emisión monetaria.

Así, los déficit fiscales, medidos en relación con el producto bruto interno, fueron creciendo sostenidamente. El gasto cuasifiscal llegó a constituir un tercio de casi todos los gastos de 1982, situándose en más del 20 por ciento en los años siguientes, con la salvedad de 1986.

Por esa razón existió consenso general en este Congreso para introducir una urgente modificación sustancial al sistema imperante. Así, la ley de emergencia económica, sancionada hace poco más de dos años, disponía en su artículo 3º la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, precisando los principios a que debía sujetarse la comisión redactora y señalando como punto capital que debía acordarse al Banco Central la independencia funcional necesaria para cumplir su misión primordial de preservar el valor de la moneda, a la vez que se le fijaba un perentorio plazo de treinta días.

No han quedado plasmadas en el proyecto que examinamos las directivas de dicha ley en lo que se refiere al sistema de garantía de los depósitos. Sin embargo, cabe señalar que las modificaciones introducidas en el régimen vigente —en especial la limitación de la responsabilidad total del Banco Central de la República Argentina en la materia, a 50 millones de dólares en BONEX 89— han motivado a la generalidad de las instituciones bancarias y financieras a desvincularse del régimen de la ley 21.526, por lo que en los hechos el sistema ha perdido relevancia.

Sigue pendiente asimismo la creación del ente para atender la liquidación de los activos de los bancos y entidades financieras en proceso de disolución y liquidación, que establecía la ley de emergencia económica, así como también la normativa respecto de la política crediticia vinculada al comercio exterior, cuya importancia para el futuro inmediato del país es fundamental.

Si bien ayer se han hecho anuncios de que antes de fin de año estará en funcionamiento un banco de inversión y comercio exterior, lo que llenaría el sentido vacío que ha provocado el cierre de las líneas de financiación que el Banco Central acordaba con tal destino.

El proyecto en debate entraña un cambio sustancial respecto de la legislación vigente, encerrando una concepción que comparto en sus aspectos más relevantes. Constituye sin duda un avance de significación que el Banco Central de

la República Argentina deje de depender del Poder Ejecutivo nacional para ser el ente autárquico que desarrolla la política monetaria y financiera acorde con la legislación que dicte este Congreso de la Nación.

De más está decir qué enormes padecimientos se hubiera ahorrado el país si una norma como la que proyecta el artículo 3º hubiese estado vigente y se hubiese respetado en el período antes citado.

Del mismo modo la expresa independencia que le concede el citado artículo respecto de todo otro órgano del Estado federal contrasta con la disposición anterior que ajustaba el accionar del Banco Central a las directivas generales que el gobierno nacional dictaba por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en materia de política económica, monetaria, cambiaria y financiera.

Estas dos normas, en conjunción con las disposiciones de la Ley de Convertibilidad, constituye un paso hacia la consolidación de las instituciones básicas de la estructura económica y financiera, conformando un marco sólido para el desarrollo de la política monetaria que preserve el valor de la moneda.

Del mismo modo, el requerimiento del acuerdo del Senado de la Nación para el nombramiento del presidente, vicepresidente, directores y síndicos del Banco Central de la República Argentina es otra norma de buena administración pública y contribuye al equilibrio de las funciones de gobierno. Este requisito deberá extenderse también al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias que crea el capítulo XII de este proyecto de ley.

Vale la pena destacar que se regresa al concepto que privó en la primera carta orgánica de este banco, abandonado a partir de 1946 con el breve interregno del decreto ley 13.126/57.

También resulta una novedad el proceso de remoción de los miembros del directorio cuando se establece el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación.

Comparto la normativa referente a las funciones que cumplirá el Banco Central de la República Argentina en los artículos 3º, 4º y 29, este último referido al régimen cambiario.

No encuentro objeciones respecto de lo dispuesto en materia de gobierno del banco. Tanto en lo que hace a la composición e integración del directorio, como a las funciones y atribuciones del presidente y del directorio, por cuanto se corresponden con las tradicionales en esta materia, destacando como novedad la rendición del in-

forme anual a este Honorable Congreso sobre sus operaciones, si bien la ley de emergencia económica había prefijado un período semestral y la presencia del presidente de la institución ante las comisiones respectivas de ambas Cámaras en reunión conjunta.

De igual manera, la facultad que acuerda este proyecto al ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación acerca de participar con voz pero sin voto en las reuniones de directorio agrega un adecuado balance a la gestión de la entidad.

El capítulo V legisla sobre las operaciones del banco, precisando en sus artículos 17 y 18 las facultades con que cuenta y las que están autorizadas, en tanto que el artículo 19 enuncia expresamente aquellas que le están prohibidas.

En este aspecto, la excepción en materia de financiamiento del gobierno nacional que anteriores leyes acordaron, abriendo el paso a la financiación ilimitada y a la emisión monetaria sin respaldo, ha sido completamente acotada, lo que encuentra mi aprobación.

En esta normativa se registra la prohibición de garantizar obligaciones de las entidades financieras, incluidas las originadas en la captación de los depósitos, lo cual deja el vacío a que nos hemos referido en un principio, quedando para decidir en un futuro la conveniencia de acordar nuevos sistemas.

Con relación al capítulo IX, que estatuye en materia de emisión de moneda y reservas en oro y divisas, el proyecto introduce la prohibición a cualquier órgano del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y las municipalidades de emitir billetes, monedas metálicas u otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda, lo cual merece mi apoyo por cuanto evitará ciertos abusos que se han cometido sobre el particular al amparo de la inexistencia de norma alguna en esta materia.

En este capítulo debo señalar que resulta elevada, a mi juicio, la proporción de hasta una tercera parte de las reservas de libre disponibilidad, que podrán ser integradas con títulos públicos a valor de mercado. Considero que si se llegase a utilizar esta facilidad en toda su extensión se podría dañar seriamente el consenso y la confianza que el esquema de la ley de convertibilidad ha dado al sistema monetario y cambiario. Si bien el monto computable en títulos públicos a valores de mercado pasó de aproximadamente 117 millones de dólares al 5 de abril a 600 millones de dólares hasta el presente, tal participación no ha superado el 12 por ciento

desde la sanción de la ley 23.928, y cuando se aproxima a este porcentaje provoca dudas y expectativas en los mercados. Propongo consecuentemente que se reduzca al 20 por ciento la autorización acordada de hasta una tercera parte.

El proyecto presenta además en materia de fiscalización el agregado de un tercer control que se practicará por medio de auditores externos cuyo informe será remitido tanto al Poder Ejecutivo de la Nación como a este Honorable Congreso. No comparto esta propuesta, máxime desconociendo sus costos, sino que entiendo que debe preverse un tipo de contralor como el que se procura en la nueva ley sobre fiscalización de los entes públicos que se halla en vísperas de tratamiento en la Cámara de Diputados. Por tal motivo, señor presidente, propondré la eliminación del artículo 39 en el tratamiento en particular.

En materia de información económica, legislada por el artículo 42, advierto que se le ha quitado el carácter de obligatoriedad al servicio de estudios y análisis, cuyo mantenimiento ha producido un importante número de trabajos y publicaciones que no es conveniente dejar al arbitrio de las autoridades de turno.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, como órgano desconcentrado —término que no me resulta adecuado—, que se crea por el capítulo XII de la ley, implica condensar en un apartado especial distintas normas por las cuales el Banco Central efectuaba el contralor de tales entes.

He mencionado previamente que en razón de la jerarquía y responsabilidad de tales funciones, sería conveniente también el acuerdo de este Senado para la designación del superintendente y el vicesuperintendente. Es más, los artículos 46 y 47 transfieren a dicho superintendente algunas de las funciones tradicionalmente reservadas al directorio del Banco, tales como la autorización de la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias y de las filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras o bien la autorización de apertura de sucursales o la fusión de entidades financieras.

Considero que poner bajo la dependencia de una sola persona tales responsabilidades implica correr un innecesario riesgo en materia de discrecionalidad y caer en lo que otras medidas gubernamentales están —como dicen permanentemente— procurando evitar.

Estas razones me llevan a proponer, señor presidente, que los incisos a), b), c), d), e) y f)



requieran previa anuencia del directorio, con lo cual se obviaría el inconveniente que he mencionado.

En idéntico sentido entiendo que la facultad acordada por el inciso c) del artículo 47 respecto de las políticas crediticias de las entidades y por el inciso d), relativa a la obtención de recursos por parte de las entidades financieras en moneda extranjera, y por el inciso f) en materia de sanciones, debe ser ejercida con anuencia del directorio del Banco Central, por la gravedad que comportan.

También creo que el artículo 49 acuerda una facultad de suma trascendencia, como es el cierre transitorio total o parcial de una o varias entidades financieras, sin exigir el cumplimiento de una serie de requisitos para dictar tal medida.

Resulta de extrema gravedad por las consecuencias que pueda originar la aplicación de esta facultad sin justificación legal, por lo cual propicio que la misma esté sujeta al cumplimiento previo de distintos pasos, como por ejemplo el informe circunstanciado sobre la situación de la entidad financiera emergente de labores de supervisión e inspección; la notificación previa a la entidad de las irregularidades en examen y concesión de un plazo para su corrección; la intimación bajo apercibimiento de suspensión en el caso de que el plazo anterior no se haya cumplido para entonces finalmente poder sancionar esta medida.

Para terminar, señor presidente, quiero decir que el proyecto que analizamos constituye sin duda alguna un notable avance sobre la legislación existente en materia de política monetaria y financiera. Considero que contribuirá en gran medida a consolidar el proceso de estabilización en el cual nos encontramos empeñados con nuestro esfuerzo cotidiano los habitantes de nuestro país.

Con las discrepancias sobre aspectos puntuales que he señalado, adelanto el voto favorable en general de mi bancada, el Partido Autonomista de Corrientes.

**Sr. Presidente** (Brasero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: el Senado inicia hoy el estudio de las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central sugeridas por la comisión especial creada en función de la ley de emergencia económica. Ellas han sido recogidas en el proyecto de la mayoría que fuera explicitado por el señor senador Juan Carlos Romero.

Tal es la importancia del tema que no resisto la tentación de leer, con permiso de la Cámara, palabras realmente expresivas que en una reciente convención convocada por la Asociación de Bancos de la República Argentina pronunciara el propio presidente actual del Banco Central.

Decía el doctor Roque Fernández en esa oportunidad: "La Carta Orgánica puede servir para afianzar la estabilidad monetaria o para facilitar el descontrol financiero del Estado, generando inflación e inestabilidad. Puede servir para brindar un entorno adecuado para el desarrollo del mercado de capitales o para inhibir la inversión y el crecimiento. Puede servir para facilitar el comercio exterior o para aislar la economía doméstica del resto del mundo; puede servir para mejorar la distribución del ingreso o para deteriorarla, permitiendo transferencias regresivas de ingresos". Y termina diciendo: "Desde el Banco Central se pueden distribuir fortunas y se pueden crear empresas y simultáneamente arruinar industrias".

Se ha hablado insistentemente, señor presidente, de la independencia que debe tener un banco central. Pero ésta no se relaciona con la política monetaria que el artículo 14 del proyecto pone en manos exclusivas del directorio del Banco Central.

Esta pretendida independencia es sólo para poner al Banco a cubierto de las presiones del sector público, tendientes a financiar los déficit presupuestarios que deberían cubrirse por vía de la política fiscal.

El proyecto en consideración tiene varias disposiciones que constituyen un reaseguro frente a este riesgo.

Entre ellas está la de artículo 3º, que establece que en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del gobierno federal; la del artículo 7º que dispone el acuerdo del Senado para la designación de sus autoridades; la del artículo 8º que prohíbe integrar el directorio con funcionarios remunerados por los gobiernos nacional, provinciales y municipales, así como con los integrantes del Poder Legislativo; y especialmente la del artículo 20, que señala que el Banco sólo podrá financiar al gobierno nacional a través de la compra a precios de mercado de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación hasta un diez por ciento por año calendario.

Hecha esta aclaración, debo decir que las políticas fiscal y monetaria forman parte indisoluble

de la política económica global del gobierno que persigue determinados fines, cuyos puntos óptimos son la estabilidad, el crecimiento y la justicia social en la distribución de los ingresos, objetivos que pueden ser de signo positivo o negativo según las circunstancias o las políticas, como bien lo señaló el señor presidente del Banco Central en la exposición que cité hace unos instantes.

En la misma reunión de ADEBA, el doctor Leonardo Anídjjar, dijo que todos los proyectos sobre reformas de la Carta Orgánica —y lo cito textualmente— “tienden en general a creer que la política monetaria es totalmente autónoma y la causa fundamental de la inflación, y omiten por completo las consideraciones sobre la política fiscal y su rol, y la necesidad de coordinación entre ésta y la política monetaria”.

Por estas razones, señor presidente, considero que sería más acertado que el dictamen dijera que el Banco Central será el órgano de ejecución de la política monetaria y financiera, y no como lo establece el artículo 14 del despacho en mayoría cuando afirma que el directorio es el que determinará la política monetaria y financiera del banco.

Me inclino por una fórmula que establezca lo siguiente: “La política monetaria y financiera del Banco Central, como órgano ejecutor, deberá ser coherente y coordinada con la política fiscal, de acuerdo con los objetivos fijados en el programa económico global, conformado en virtud de las leyes fundamentales dictadas por el Congreso de la Nación”.

Por otra parte, la coherencia y la coordinación surgen de disposiciones contenidas en el dictamen en consideración, de las que destaco la siguiente: “La participación con carácter consultivo del presidente del Banco en las reuniones convocadas por el gobierno nacional para discutir temas vinculados con la política monetaria, cambiaria y financiera (artículo 10 inciso f); la concurrencia con voz pero sin voto, del ministro de Economía a las sesiones del directorio (artículo 12, último párrafo), y el intercambio de informaciones recíprocas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, que establecen los artículos 26 y 27”.

Me voy a referir ahora a una modificación que importa un cambio doctrinario fundamental con relación a la ley actual; la contiene el artículo 3º, que establece que “es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda.” Esta función había quedado relegada o subestimada en la Carta Orgánica vigente, cuyo artículo 3º,

inciso a), coloca al objetivo de regular el poder adquisitivo de la moneda en último término y a la zaga de otros cometidos.

Creo que hoy existe conciencia de que la estabilidad es un prerrequisito para el crecimiento y el desarrollo. Una moneda fluctuante introduce la desconfianza y crea incertidumbre en los negocios, retrayendo a los inversores. Para comprender todo lo que significa el cambio de ubicación en el objetivo de preservar el valor de la moneda, me permitiré hacer unas breves consideraciones elementales de carácter económico.

En una economía competitiva, en un mercado en que todos los bienes son escasos, con relación a las insalvables apertencias o necesidades de los consumidores, el productor de un bien no puede por sí solo fijar cantidades y precios: si quiere vender una determinada cantidad el precio lo fijará el mercado, y si quiere obtener un determinado precio la cantidad demandada por los consumidores la fijará el mercado. Otra cosa diferente sucede cuando en lugar de una economía competitiva existe monopolio en virtud del cual el productor está en condiciones de ofrecer la cantidad que desea y además fijar el precio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del proyecto en consideración “el Banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina y ningún otro órgano del gobierno nacional, ni de los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos, u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes, ni monedas metálicas, ni otros instrumentos que fueren susceptibles de circular como moneda”, según reza dicho artículo. Es decir, el Banco tiene el monopolio y como ya han pasado muchas décadas desde cuando el soberano era el encargado de acuñar monedas en metales escasos como el oro y la plata, y hoy la moneda que se utiliza son simples papelitos denominados billetes, emitidos por el Estado, o dinero bancario creado por las instituciones financieras con motivo del multiplicador de los depósitos, las cantidades a ofrecer pueden aumentar hasta el infinito, y como sucede con cualquier otro bien, esos papelitos pierden valor a medida que aumenta su cantidad, o lo que es lo mismo, el precio de los otros bienes sube.

Dadas esas dos condiciones que ostenta el Estado, la de monopolista y la de productor de cualquier cantidad de papel que van perdiendo valor a medida que aumenta la cantidad, es necesario que opere un sistema regulador, el que está contenido en varios artículos del proyecto en consideración, especialmente en el artículo 4º, inciso a) que dice que “corresponde al

Banco Central regular la cantidad de dinero —esto es, moneda y depósitos bancarios— y observar la evolución del crédito en la economía.

Aunque pueda parecer contradictorio usar el término "regular" en momentos en que se está hablando de desregulación de toda la economía, debemos señalar que la necesidad de regulación aparece cuando al objetivo de mantener el valor de la moneda se agrega en la tercera década de este siglo, el concepto de liquidez del mercado monetario para mantener el nivel de actividad económica, sobre todo en países de estructura cíclica.

Por eso en la creación de nuestro Banco Central —y creo que algo de esto fue puesto de manifiesto por algunos oradores preopinantes— se hace especial mención a las oscilaciones cíclicas de nuestra economía en razón de su naturaleza predominantemente agraria, ya que estaba sujeta a los vaivenes climáticos que afectaban la cosecha.

Por otra parte, había que proveer los fondos para la siembra y producción y luego evitar que el ingreso del dinero proveniente de las exportaciones pudiera generar inflación. En tal sentido recordemos que en 1935 se vivían los remezones de una crisis, y como consecuencia de la transferencia del oro existente en la antigua Caja de Conversión se pudo emitir una suma de dinero suficiente que permitió financiar las cosechas y crear el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, que evitó la quiebra de cuatro importantes bancos locales.

En materia monetaria y en lo que hace al Banco Central podemos decir pues que existen regulaciones inevitables, como ocurre con la Ley de Convertibilidad vigente, que impide emitir dinero sin ingresar el equivalente en divisas o en un determinado porcentaje de Bonos Externos. Otras regulaciones surgen del despacho de la mayoría. En el artículo 14, inciso a), se señala que son atribuciones del directorio intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario, estando facultado para operar en ambos mercados. Por el inciso b) se lo faculta para prescribir requisitos de encaje. Por el inciso c), para fijar las tasas de interés. Por el d), para establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras. Por el inciso g), para fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero.

Asimismo, por el artículo 28 del despacho de la mayoría se establece que con el objeto de influir en la cantidad de dinero el Banco Central de la República Argentina puede exigir que las

instituciones financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos y otros pasivos.

Otros ejemplos de instrumentos regulatorios del proyecto en consideración son el artículo 17, incisos b) y c) por los que se faculta al Banco Central para el otorgamiento de redescuentos y adelantos a las entidades financieras, y el artículo 18, inciso a), que lo faculta para comprar y vender a precio de mercado títulos públicos, divisas y otros activos financieros.

Debo advertir que en su función reguladora de la cantidad de dinero —cuyos ejemplos acabo de explicitar— el Banco Central puede actuar en forma activa o pasiva con relación a otros objetivos de la política económica, como ser el pleno empleo, el crecimiento económico ordenado y creciente y la justicia social, objetivos todos que se enumeran en el artículo 3º de la ley vigente.

Con estas últimas finalidades se volcaron en la carta orgánica vigente del Banco Central ideas keynesianas en boga en la década de los años 30, que consistían en afirmar que una inyección de dinero en la plaza era capaz de absorber la desocupación, impulsar el crecimiento y liquidar la crisis sin inflación, como ya lo recordamos. Pero esa función activa regulatoria del Banco Central, que permitió superar la crisis de 1935 con una inyección de dinero, se convierte hoy en una función regulatoria más dinámica, activa o pasiva, según las circunstancias de cada momento.

Hoy todos los economistas están de acuerdo en el principio básico del monetarismo de Milton Friedman —"La cantidad de moneda también importa", según reza— y aceptan que aun en estado de recesión, parte de una emisión adicional puede impulsar la producción o reactivar la economía. Pero otra parte se va a los precios; según sea la proporción, se requerirá una política mixta, activa o pasiva, según el caso que regule la cantidad de dinero de acuerdo con las necesidades de los negocios.

Ese sentido tiene la disposición del artículo 4º, inciso a), que establece que corresponde al Banco Central regular la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la economía, que ya he citado anteriormente.

Para no extender demasiado esta exposición, terminaré diciendo que tengo la esperanza de que con las cláusulas regulatorias y los reaseguros que he mencionado, incluidos en este proyecto, más las rígidas disposiciones contenidas en los capítulos vinculados con la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y de Auditoría, el Banco Central no podrá conver-

tirse en un obstáculo para alcanzar los objetivos de crecimiento y estabilización. Tampoco convertirá a la política monetaria en un sustituto de la política fiscal, a través de la financiación de proyectos y gastos del Estado que deben ser financiados con recursos genuinos y no con el impuesto inflacionario. El sector privado podrá complementar sus recursos propios con la ayuda del crédito proveniente de los ahorros de los particulares, que deben ser reembolsados a sus titulares.

Señor presidente: recogiendo la dramática advertencia del presidente del Banco Central que cité al comienzo de mi exposición, respecto de la trascendencia que sobre el interés general y el de los particulares tienen los poderes acordados a dicha institución, cabe desear que sus autoridades procedan siempre con la prudencia, la ecuanimidad y el acierto que exigen las graves responsabilidades que la ley les confiere.

Con estas breves reflexiones adelanto mi voto favorable al proyecto de ley en "consideración".

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Hay solamente ocho senadores en el recinto y treinta y ocho están ausentes. Como no está anotado ningún otro orador en la lista, vamos a llamar para formar quórum y votar en general. En caso contrario, pasaremos a cuarto intermedio hasta mañana, tal cual fue aprobado oportunamente.

— Se llama para votar.

— Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Continúa la sesión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: si el cuerpo está de acuerdo, que se vote por capítulos, dándose el tiempo necesario para que los senadores que lo deseen puedan formular observaciones.

**Sr. Trilla.** — Sí, porque en algunos de ellos tenemos observaciones importantes.

**Sr. Sánchez.** — Cuando se enuncien los capítulos, pidan la palabra. Esto es reglamentario.

**Sr. Trilla.** — Esta es una disposición que no conozco en el Reglamento.

Los proyectos de ley se votan artículo por artículo. Ahora bien; si convenimos otra cosa...

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Les ruego a los señores senadores que no dialoguen.

**Sr. Trilla.** — Yo me dirijo a la Presidencia.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Usted pertenece al Senado y aquí se ha votado así varias veces, señor senador.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Le ruego que haga silencio porque usted no está en el uso de la palabra. Tiene que comportarse bien porque es el presidente de bloque.

Le pregunto al señor senador por Salta si su propuesta concreta para la votación en particular...

**Sr. Rodríguez Saá.** — ¿Está haciendo un discurso, señor presidente? Pida la palabra desde su banca.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Le ruego que guarde silencio.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Hice moción para que, tal como ha sucedido otras veces en este cuerpo, se vote por capítulos. Esta es sólo una moción que no implica un cambio de metodología.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Me extraña la actitud del señor senador Trilla porque en este cuerpo se ha votado varias veces por capítulos. Si algún señor senador quiere hacer modificaciones tal como lo sugirió el señor senador por Salta, podrá pedir la palabra cuando se mencione el capítulo correspondiente. Al enunciarse el capítulo, se dirá qué artículos comprende. Esto es de práctica y se ajuste a la jurisprudencia de este Senado.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Lo que explica el señor presidente del bloque justicialista es algo distinto a lo que se dice aquí. El Reglamento dice que los proyectos de ley se deben votar artículo por artículo.

Ahora bien; a los efectos de acortar el debate y de ser condescendiente con la exigencia del bloque mayoritario, si se vota por capítulos que se lo haga muy lentamente, porque de lo contrario vamos a perdernos en este asunto y no lo trataremos con seriedad.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Sánchez.** — El señor senador por San Luis, presidente de nuestro bloque, ha expresado lo que dije en medio de todo este montón de palabras que se cruzaron.

Creo que si la Cámara así lo decide se puede votar por capítulos con la debida lentitud, a los efectos de que quien tenga que hacer alguna objeción o proponer modificaciones a los artículos incluidos en ese capítulo pueda hacerlo.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Habida cuenta del consentimiento prestado por el señor senador por la Capital, se va a pasar a votar en particular por capítulos con la lentitud necesaria como para que cualquier senador que quiera proponer reformas, pueda hacerlo.

Por Secretaría...

**Sra. Saadi de Dentone.** — No hay quórum, señor presidente.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Ruego a los señores senadores que están de pie que ocupen sus bancas para poder contar con el quórum necesario.

— Suena la campanilla de orden.

— Se cita el capítulo I artículos 1º al 4º.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — En el artículo 3º hemos hecho una observación, incluyendo el concepto de unidad de cuenta dentro del segundo párrafo.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Solicito al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preste su conformidad o disconformidad a la propuesta formulada.

**Sr. Romero.** — La comisión acepta el agregado propuesto para el segundo párrafo del artículo 3º, contenido en el orden del día impreso. Luego de "reserva de valor" se agrega la expresión "unidad de cuenta".

**Sr. Trilla.** — Eso es lo que proponemos, señor presidente.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el capítulo I con la propuesta formulada por el señor senador por la Capital y aceptada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda...

**Sr. Trilla.** — Disculpe la interrupción, señor presidente. ¿Se va a votar el capítulo o el artículo...?

**Sr. Presidente (Brasesco).** — ¿El señor senador tiene otra observación que formular?

**Sr. Trilla.** — Claro, por eso creo que lo que se propuso...

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Proponga la otra modificación.

**Sr. Trilla.** — Cómo no.

Propongo la anulación del tercer párrafo del mismo artículo. Ya di los argumentos con anterioridad.

En cuanto al artículo 4º del mismo capítulo —miren qué cosa, lo que siempre pretende la mayoría—, proponemos cambiar los términos del inciso a). Al respecto, ya está enterado el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luego, está la modificación del inciso d). En fin, las ya propuestas.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

**Sr. Romero.** — La comisión acepta solamente el agregado propuesto al segundo párrafo del artículo 3º. No acepta las otras modificaciones.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — A los efectos de pasar a la votación, le pregunto al señor senador por la Capital si no tiene ninguna otra propuesta de modificación que formular al capítulo I.

**Sr. Trilla.** — Solamente las que he expresado, señor presidente.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La comisión ha aceptado única y exclusivamente la reforma propuesta al segundo párrafo del artículo 3º.

**Sr. Trilla.** — Entonces pregunto: ¿cómo hago para votar en contra de una cosa y a favor de otra con la que estoy de acuerdo dentro del capítulo I? No sé qué libro tomar para aprender esto. ¿Cómo se hace para votar por la afirmativa en un caso y por la negativa en otro dentro del mismo capítulo?

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor senador: tiene que decir "quiero la primera y paso la segunda". (Risas.)

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La Presidencia va a hacer votar por artículos el capítulo I, atento a que ha habido propuestas de modificación.

**Sr. Rodríguez Saá.** — ¿Me permite, señor presidente?

Es muy fácil, señor senador. Usted vota por la negativa el dictamen de la comisión, porque usted no está de acuerdo con él. Si la propuesta de la comisión llegara a resultar perdidosa en la votación, entonces se votaría la proposición del señor senador por la Capital. Esta es la solución.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Lo que ocurre es que el señor senador por la Capital y la comisión están de acuerdo en un artículo y en desacuerdo en otros.

A los efectos de evitar cualquier confusión, la Presidencia va a poner a votación los artículos que fueron objeto de propuestas de modificación.

**Sr. Sánchez.** — ¿Me permite, señor presidente?

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Sánchez.** — Observo, señor presidente, que venimos tratando los proyectos con cierta desprolijidad no compatible con la técnica parlamentaria que debemos respetar.

La Presidencia siempre pregunta si la comisión acepta o rechaza una modificación. Eso no puede ser, porque no es la comisión la que decide; es la Cámara la que tiene la palabra para aceptar o rechazar una modificación propuesta.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La Presidencia piensa igual que el señor senador.

Simplemente habría que poner a votación artículos acerca de los cuales la comisión y quien ha propuesto la reforma coinciden. Luego, el cuerpo será el que decida en la votación.

En consecuencia, el Capítulo I se va a votar por artículos.

— Se leen y aprueban los artículos 1º y 2º.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por el señor senador por la Capital y aceptada por la comisión.

— La votación resulta afirmativa

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el artículo 4º tal como figura en el dictamen de la comisión. Si fuera derrotada la posición sostenida por la comisión, entonces se votaría el artículo 4º con la modificación propuesta, tal como es costumbre en este cuerpo.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita y aprueba el Capítulo II, artículo 5º.

**Sr. Trilla.** — Acá las reformas las conocen todos.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Sí. Se ha votado el Capítulo II, artículo 5º, tal como figura en el dictamen de la comisión, o sea rechazando las reformas propuestas por el señor senador por la Capital.

En consideración el Capítulo III, artículos 6º a 15.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Hay reformas propuestas a los artículos 6º y 7º, que también están indicadas en el anexo que conoce la bancada mayoritaria.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — ¿El señor senador por la Capital propone reformas a los artículos 6º y 7º?

**Sr. Trilla.** — En el artículo 6º propongo una sustitución. ¿Por qué no se lee por Secretaría, señor presidente?

**Sr. Rodríguez Saá.** — Pido la palabra para una moción de orden.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: formulo una moción de orden.

Dada la dificultad de comprender qué es votar por capítulo, cosa que pareciera imposible, proponga volver a la forma tradicional, esto es, artículo por artículo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que ya se han manifestado las distintas opiniones en este asunto, solicito que seamos breves para poder entender las ponencias y sancionar esta norma con rapidez.

Entonces, señor presidente, solicito que se vote la moción de orden que acabo de formular.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — En consideración la moción de orden formulada por el señor senador por San Luis.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Continuamos la consideración en particular artículo por artículo.

— Se lee el artículo 6º.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra:

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Señor presidente: quiero agradecer la consideración que ha tenido la bancada mayoritaria al entender que votar artículo por artículo es el único mecanismo por el cual puede votarse esta ley. Me siento conforme y esta noche podré irme tranquilo. *(Risas.)*

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el artículo 6º

— La votación resulta afirmativa.

— Se lee el artículo 7º.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Proponemos suprimir la última frase: "Dicho período será contado a partir de la sanción de la presente ley", para compaginar este artículo con disposiciones posteriores.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el artículo 7º, primero de acuerdo con el texto propuesto por el dictamen de comisión.

— La votación resulta afirmativa.

— Se leen y aprueban los artículos 8º al 13.

— Se lee el artículo 14.

**Sr. Romero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: la comisión acepta la modificación propuesta por el presidente de la Comisión de Economía.

El primer párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: "El directorio determina la ejecución de la política monetaria...".

Asimismo, en el inciso g) proponemos la supresión de la expresión "por el Instituto de Garantía de Depósito y". Esto es así porque esta institución fue eliminada en otro artículo. En esta redacción había quedado un resabio del texto original sobre el cual empezamos a trabajar.

**Sr. Trilla.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Romero.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Deseo una mayor información ya que se trata de un tema que no hemos tratado durante este debate ni en reuniones anteriores. El inciso g) establece: "Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero, las que deberán ser observadas por el Instituto de Garantía de Depósitos y por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias".

**Sr. Romero.** — Continúo.

Como el Instituto de Garantía de los Depósitos no va a existir, se trata de una referencia a una facultad o atribución del Directorio válida al momento en que trabajamos sobre el proyecto original. Pero como este dictamen elimina dicho instituto en la parte correspondiente la mención carece de sentido; de allí que solicitamos su eliminación.

**Sr. Trilla.** — La opinión de nuestra bancada es que debe existir la concepción de la garantía de los depósitos. La hemos indicado en uno de los artículos de nuestro dictamen.

Propongo entonces que en lugar de "Instituto" diga "ente", porque podría tratarse de un organismo interno.

Reitero, pues, que mi propuesta se basa en la convicción de que este concepto debe figurar, porque no podemos crear la brecha de que no hay una legislación en materia de garantía de depósitos cuando materialmente existe para algún tipo de entidades financieras. Luego en una ley especial lo consideraremos.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — La comisión mantiene la posición original de eliminar el párrafo mencionado.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el artículo 14 con las reformas propuestas por la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

— Se lee el artículo 15.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Al fundar el dictamen de minoría hablé de la necesidad de que exista el gerente general, e hice referencia a la distancia entre las funciones que deben desempeñar los directores y los demás funcionarios. En consecuencia, el inciso b), que se nos había pasado por alto al estudiar el asunto, tendría que estar redactado así: "Designar el gerente general y...".

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — La experiencia de la acumulación de un poder extraordinario en manos de un gerente llevó a que este proyecto se refiriera solamente a la creación de subgerencias. Esto divide las tareas y simplifica la organización burocrática. Por lo tanto, mantenemos el dictamen original.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Lafferrière.** — Mi sugerencia está dirigida a un tema al que hice mención durante el debate en general merced a una interrupción que me concediera el miembro informante.

Dice el inciso e) que el directorio tiene la facultad de "elaborar y aprobar el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y los sueldos del personal". Yo agregaría: "no pudiendo ningún sueldo exceder la dieta de un le-

gislador nacional". Esto permitiría establecer un límite objetivo que evite las contradicciones en las que hemos caído con las antarquías, como la que se concedió al Poder Judicial de la Nación. Me parece que sería una disposición lógica, justa y en concordancia con el sentido republicano que debe guiar los actos de gobierno.

**Sr. Romero.** — La comisión no acepta la modificación.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el artículo 15 tal como figura en el dictamen.

— La votación resulta afirmativa.

— Se lee el artículo 16.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Para ser coherente con la propuesta de modificación al artículo anterior, proponemos que a continuación de "por intermedio de" se agregue "un gerente general y tres", suprimiendo la palabra "los". Ya dimos las razones.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Solicito que se vote el dictamen en mayoría.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Ruego al señor senador por San Luis que tome asiento para que se pueda proceder a la votación.

**Sr. Trilla.** — Está vendiendo mármol ónix.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar el artículo 16 tal como figura en el dictamen.

— La votación resulta afirmativa.

— Se leen y aprueban los artículos 17 y 18.

— Se lee el artículo 19.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — De acuerdo con este artículo hay tres prohibiciones que tiene el Banco, establecidas en los incisos d), i) y k), que queremos eliminar para que esto no sea una prohibición de facultades del directorio. Los incisos d), i) y k) constituyen situaciones que está prohibido realizar por parte del banco y nosotros creemos que pueden ser realizadas.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — La comisión cree que esas prohibiciones son muy importantes para cuidar y preservar la función primordial del banco. Por ello no aceptamos la modificación propuesta.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 19 según figura en el dictamen en mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se lee el artículo 20.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Solicitamos la eliminación del segundo párrafo del artículo 20. Ya dimos nuestras explicaciones y a su vez solicitamos que el Banco Central nos proporcione los datos sobre qué cálculos, qué cuantificación y valoración ha hecho para determinar el 10 por ciento como valor mayor de adquisición de títulos públicos, por considerar que esto es prácticamente un cepo —de acuerdo a términos modernos— al propio crecimiento económico.

Entonces, pretendemos la eliminación del segundo párrafo del artículo 20.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — La comisión cree que el hecho de que no crezca más del 10 por ciento la tenencia de títulos públicos por parte del banco es un límite muy útil.

Por ello, sostenemos la redacción original.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La Presidencia ruega a los señores senadores que están de pie que ocupen sus bancas para tener quórum.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 20, según figura en el dictamen en mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se leen y aprueban los artículos 22 al 27.

— Se lee el artículo 28.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Solicitamos la eliminación del segundo párrafo de este artículo, que dice: "No podrá exigirse la constitución de otro tipo de depósitos indisponibles o inmovilizaciones a las instituciones financieras". Nos parece bien que no sea una facultad, pero no creemos conveniente que se prohíba por la presunta capacidad que tienen los actuales directores —y seguramente los que vendrán, si es que corresponde— de constituir este tipo de exigibilidades a la banca privada o pública, según el caso, o no.



**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — La comisión no acepta la eliminación propuesta.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 28 tal como figura en el dictamen en mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se lee el artículo 29.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Hemos propuesto agregar un inciso c). Aceptamos la redacción y objetivos propuestos por los incisos a) y b) de este artículo y proponemos el agregado de un nuevo inciso que establezca que deben programarse las funciones del Banco Central tal como figuran en las cartas orgánicas anteriores respecto del problema de las exportaciones y las importaciones y los otros elementos que constituyen la balanza de pagos.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Ya hemos indicado en el informe en general que un organismo, un banco, se ocupará especialmente de la actividad de comercio exterior, que es muy importante. No será función del Banco Central, razón por la cual es innecesario proponer esa facultad.

La comisión no acepta la propuesta.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 29, tal como figura en el dictamen en mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se leen y aprueban los artículos 30 al 35.

— Se lee el artículo 36.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Nosotros queremos reformar realmente la estructura de la sindicatura. Nuestra propuesta consiste en la creación de una comisión fiscalizadora determinando las calidades profesionales de sus integrantes, como ya lo explicité cuando informé en forma general el dictamen.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta los argumentos vertidos oportunamente, solicito que se apruebe el artículo 36 tal como figura en el anexo al dictamen.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — La comisión entiende que esta institución tiene muchísima importancia. No estamos de acuerdo con que sea una comisión fiscalizadora. Hemos previsto la existencia de un síndico titular y uno adjunto, quienes deberán ser designados con el mismo método que los directores, o sea con acuerdo del Senado.

De esta forma, consideramos suficientemente cubierta la función que compete al organismo de control.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Como no ha sido aceptada la propuesta formulada por el señor senador por la Capital, se pone a votación el artículo 36 tal como se encuentra en el dictamen de comisión.

— La votación resulta afirmativa.

— Se leen y aprueban los artículos 37 a 39.

— Se lee el artículo 40.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — En primer lugar, quiero referirme al título de este artículo: "Tribunal de Cuentas". Nosotros proponemos que diga: "Del órgano de control externo". En segundo término, con respecto al texto del artículo 40, solicito que se acepte la propuesta formulada en el anexo al dictamen de comisión.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

**Sr. Trilla.** — ¿Me permite una interrupción, señor presidente, a efectos de una aclaración?

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Sí, señor senador.

**Sr. Trilla.** — En lugar de "Del órgano de control externo", de acuerdo con los estudios realizados, debería decir "Del ente de control externo".

**Sr. Romero.** — La Comisión acepta la sugerencia, entendiendo que estamos hablando en los mismos términos. Es decir que el título sería "Del ente de control externo" y al final del artículo 40 se reemplazaría "al Tribunal de Cuentas de la Nación" por "al ente de control externo del sector público".

**Sr. Trilla.** — No llego a comprender lo que dice el señor senador por Salta. Por ello insisto en la redacción propuesta en el anexo del dictamen.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La comisión ha aceptado la propuesta.

**Sr. Trilla.** — Entiendo lo relativo a la designación, pero no comprendo las funciones que

tendrá ese ente. Nosotros las hemos explicitado y redactado en el artículo 40 del anexo del dictamen, en cuya aprobación insisto.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — La Comisión considera conveniente modificar la denominación y no la función. En dos oportunidades hacemos referencia a un organismo, cuya denominación puede ser reemplazada. Entonces, el título sería el siguiente: "Del ente de control externo". Y en la última línea del artículo 40 se suprime la frase: "al Tribunal de Cuentas de la Nación", y se coloca: "al ente de control externo del sector público".

**Sr. Trilla.** — En ese aspecto estamos de acuerdo. Hemos llegado a una designación exacta respecto de ese organismo. Pero con respecto a las funciones del organismo, indicamos otras cosas en nuestro proyecto. Me refiero al control externo posterior de la gestión administrativa, económica y presupuestaria del Banco Central de la República Argentina, que estará a cargo del ente de contralor externo del sector público, que emitirá dictamen sobre los estados contables y financieros, independientemente de la auditoría externa prevista en el artículo 39.

Nosotros queremos que además de la auditoría externa que va a auditar la totalidad de la gestión administrativa, inclusive a los efectos de tener expresión completa de un dictamen económico, financiero y patrimonial, lo realice también este ente, con el objeto de que el Congreso de la Nación tenga esa certificación de los funcionarios de la Nación y no de una unidad profesional ajena a las responsabilidades y a la dependencia burocrática que debe tener a los efectos de tener la confiabilidad propia de la misma casa.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — La Presidencia lo comprendió perfectamente. La comisión ha modificado su despacho, aceptando única y exclusivamente las propuestas hechas por la minoría en cuanto a la denominación del ente, circunstancia por la cual se pondrá a votación el despacho de la comisión con la modificación aceptada.

— La votación resulta afirmativa.

— Se leen y aprueban los artículos 41 a 58.

**Sr. Trilla.** — Perdón, pero tengo una objeción que hacer respecto del artículo 58. Por eso levanté la mano. Creo que tendría que votarse de nuevo.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Vamos a aceptar su moción. Luego haremos la reconsideración correspondiente.

**Sr. Trilla.** — Aquí modificamos algo nuestro dictamen. Decimos que el presidente y el vicepresidente del Banco Central cesarán en sus funciones el 8 de julio de 1995. Anteriormente, habían puesto el 10 de diciembre. Le estaban dando mayor mandato al actual presidente. No me preocupa mucho esto, pero de cualquier manera deberíamos poner las cosas como son: el 8 de julio de 1995. Eso a los efectos de que el presidente y el vice tengan la vigencia de su mandato en concordancia con el mandato del presidente de la República.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Siendo una cláusula transitoria, no vemos cuál es la necesidad de modificarla. La comisión no acepta la modificación.

— Se leen y aprueban los artículos 59 y 60.

**Sr. Trilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Antes de considerar el artículo 61, quiero decir que es nuestro deseo agregar dos artículos. Creemos que se producen brechas en la continuidad de las funciones del Banco Central como consecuencia de cambios de regímenes en instituciones o entes. Y dije anteriormente que no podemos confiar en la agilidad de la burocracia ni en la celeridad del Parlamento, porque no es sólo el Congreso el que demora el tratamiento de las cosas.

Entonces, hay dos temas: el de la garantía de los depósitos y el de la tarea de promocionar las exportaciones e importaciones de productos no tradicionales. El texto de estos artículos se encuentra en el anexo de nuestro dictamen. En todo caso, si los señores senadores no cuentan con él, podría ser leído por Secretaría, pero tengo entendido que cada senador lo tiene en su banca.

**Sr. Presidente** (Brasesco). — Así es.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Nos vemos obligados a no aceptar este pedido, no por capricho sino porque ya habíamos explicado el propósito de que no exista un sistema de garantía de depósitos y tampoco el mínimo riesgo de tener que pagar esas garantías por cierres de bancos, como ha pasado en la última década, lo que tuvo un costo enorme para el país.

Si el sistema financiero puede funcionar con muchos bancos que no están adheridos a este mecanismo y nada impide que las entidades

entre ellas creen un sistema de seguro, pensamos que de ninguna manera debe continuar el Banco Central manteniendo una obligación que estamos decididos que no debe existir.

En cuanto al comercio exterior, es una actividad muy importante que hemos dicho que vamos a cumplirla con un banco especialmente dedicado a tal fin. Con lo cual quiero decir que en caso de aprobarse esta carta orgánica el Banco Central transferirá a ese organismo todas las actividades relativas al comercio exterior. No es posible que esta entidad por financiar exportaciones haya tenido una pérdida de más de tres mil millones de dólares en la última década por operaciones con países que nunca han pagado.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Ya he hablado anteriormente y he aceptado la modificación que plantea la mayoría. Pero hago notar que hay un concepto equivocado que me da la impresión que está sosteniendo el señor senador por Salta. Las pérdidas se han dado por haber favorecido a países que no han pagado, o sea que se deben a decisiones políticas que nada tienen que ver con el Banco Central. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros.

El tema es que no puede quedar en el aire un período en blanco hasta la creación de una nueva entidad que se ocupe de las importaciones y exportaciones, porque no sabemos cuándo esto se va a producir. La Argentina necesita favorecer sus exportaciones no tradicionales ya que se encuentra con muchas dificultades con aquellas que son tradicionales con motivo de los precios internacionales, y de alguna manera tiene que defenderse.

Por este problema es que insistimos en el tema, no por las pérdidas, por más que queramos anular la cuenta de regulación monetaria.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La Presidencia ha tomado debida nota de lo planteado por la minoría con respecto a la incorporación de dos artículos. El señor presidente de la comisión no ha aceptado la modificación del despacho.

— El artículo 61 es de forma.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Queda sancionado el proyecto de ley.<sup>1</sup> Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

## 33

## PLAN DE LABOR

**Sr. Rodríguez Saá.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Los señores senadores aquí presentes hemos conversado acerca de cómo continuar la labor parlamentaria, y hemos acordado que se vote el siguiente plan: que terminemos la sesión de hoy y dejemos solamente sin tratar el tema de la regulación eléctrica, que se vote un cuarto intermedio para la sesión de mañana con el ministro Cavallo y también otro cuarto intermedio para sesionar el viernes o que se interprete que el viernes tenemos una sesión especial para tratar el tema de la regulación eléctrica; cualquiera de las dos interpretaciones sería válida.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Le solicito al señor presidente del bloque justicialista que en ese caso proponga una sesión especial.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Propongo que se realice una sesión especial el viernes para tratar el tema del marco regulatorio eléctrico, pero que se interprete que la misma se puede iniciar sin quórum, por ser cuarto intermedio de la presente sesión.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Grosso.** — El tema del marco regulatorio para el sistema eléctrico constituye un problema vital para el futuro del país. A nosotros nos hubiese gustado tratarlo en el momento en que sabidamente lo establece el reglamento. De todas maneras nos adherimos al pedido del bloque de la mayoría y esperamos que estos días que faltan para su consideración sirvan para que se medite sobre nuestra solicitud, de modo que no insistan los señores senadores del justicialismo en la intención de considerar dicho proyecto en la forma como ellos lo tienen programado.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por San Luis, de pasar a cuarto intermedio en la reunión de mañana hasta el viernes, a las 11.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Queda aprobada por unanimidad. Se procederá en consecuencia.

## 34

## INSERCIÓN

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Corresponde considerar ahora los asuntos que han quedado reservados sobre la mesa.